

Precedente (Sentencia)

Registro digital: 29733

Asunto: CONTRADICCIÓN DE
TESIS 2/2019.

Décima Época

Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Libro 85,
Abril de 2021, Tomo II, página
1779

Instancia: Plenos de Circuito

REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL PROCESO PENAL. A LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2020. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO, FELISA DÍAZ ORDAZ VERA Y JESÚS MARÍA FLORES CÁRDENAS. DISIDENTE: JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO. SECRETARIO: OMAR RENÉ GUTIÉRREZ ARREDONDO.

Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Pleno del Cuarto Circuito, correspondiente al día seis de octubre de dos mil veinte.

VISTO; para resolver la contradicción de tesis 2/2019 entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Penal del Cuarto Circuito, ambos con sede en esta ciudad; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Por oficio de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León y dirigido al Magistrado presidente del Pleno de Circuito en Materia Penal del Cuarto Circuito, recibido el veintiséis de noviembre siguiente, denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión 27/2019; en contra del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de revisión 177/2019 y 153/2019.

SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Pleno del Cuarto Circuito ordenó formar el expediente número 2/2019, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis; solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiado de Circuito que informaran si el criterio sustentado en esos asuntos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; finalmente, ordenó dar aviso correspondiente a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mediante acuerdos de cuatro y nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se agregaron,

respectivamente, los oficios 38/2019, suscrito por la secretaria de tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y 160/2019, suscrito por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, por los que remitieron copias certificadas de los asuntos aquí contendientes; asimismo informaron que los criterios sustentados en tales resoluciones se encuentran vigentes.

Posteriormente, por auto de seis de enero de dos mil veinte, se agregó a los autos el oficio DGCCST/X/554/12/2019, suscrito por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, y anexo que acompaña, por el que informa que de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, dictadas por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis relacionada con la presente.

Finalmente, por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se ordenó turnar la presente contradicción de tesis al Magistrado José Roberto Cantú Treviño, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, a fin de que elabore el proyecto de resolución correspondiente, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en tanto se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, con jurisdicción en este Cuarto Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, quien se encuentra facultado en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo para denunciar la posible contradicción de criterios.

TERCERO.—Posturas contendientes.

A. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión 27/2019, textualmente sostuvo lo siguiente:

"SEXTO.—Estudio.

"Los agravios son infundados en parte y, de estudio innecesario en lo demás, como se verá.

"Acto reclamado.

"***** reclamó de la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado (así se firmó el acto reclamado), la resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación *****", mediante la cual revocó la diversa resolución pronunciada en audiencia oral de diez de julio del mismo año, por el Juez de Ejecución de Sanciones del Estado y, declaró

‘improcedente’ el incidente de prescripción de la reparación del daño, promovido por dicho quejoso.

"Los antecedentes del caso son los siguientes:

"I. En once de diciembre de dos mil catorce, dentro de la causa penal *****, la Juez de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado declaró al quejoso responsable en la Comisión del delito de robo con violencia cometido en perjuicio de ***** (tercero interesada); lo condenó a quince años de prisión y multa de dos mil cuotas, equivalentes a ciento treinta y cuatro mil quinientos ochenta pesos, así como a pagar por concepto de reparación del daño a favor de ***** (tercero interesado) la cantidad que en ejecución de sentencia se justificara respecto del tratamiento psicológico de dicho pasivo.

"Los hechos materia de la causa consistieron en que el diecisiete de junio de dos mil catorce, aproximadamente a las trece horas con seis minutos, en la calle *****, colonia *****, en el Municipio del mismo nombre, el quejoso subió al vehículo Nissan, tipo Tsuru, modelo 2002 (propiedad de la sociedad tercero interesada, asiento del piloto del vehículo (sic), al cual iba subiendo ***** tercero interesado), a quien el quejoso dijo ‘súbete a la verga puto o te carga la chingada’; por lo que ***** corrió para alejarse, pero se le cayeron las llaves, el quejoso las recogió, abordó el automóvil por la puerta del conductor e indicó que (sic) sus acompañantes que subieran; después se retiró con ellos en el vehículo.

"II. En veintisiete de febrero de dos mil quince, dentro del toca *****, la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado modificó ese fallo anterior en lo relativo al monto a que ascendían las cuotas de multa, de modo que fijó la condena en ciento veintisiete mil quinientos cuarenta pesos, sustituibles por quince jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y, dejó intocados los puntos restantes del fallo recurrido.

"III. En cuatro y once de marzo de dos mil quince, el actuario adscrito a la Sala notificó la anterior resolución a ***** y *****, respectivamente.

"IV. En dos de marzo de dos mil quince, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, se declaró competente para conocer de la etapa de ejecución de la sentencia, para lo cual radicó el expediente de ejecución *****, con apoyo en las disposiciones del (sic) Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales.

"V. En siete de junio de dos mil dieciocho, el defensor público del quejoso promovió, por escrito, incidente no especificado sobre prescripción de la reparación del daño.

"VI. En once de junio de dos mil dieciocho, el Juez de Ejecución admitió a trámite ese incidente; dispuso dar vista al agente del Ministerio Público de su adscripción y, a la parte afectada ***** para que en el término de tres días hicieran manifestaciones y ofrecieran pruebas.

"VII. En diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público ofreció pruebas documentales.

"VIII. En diez de julio de dos mil dieciocho se desahogó audiencia oral en la cual el Juez declaró ‘procedente’ el incidente, que había prescrito la sanción pecuniaria relativa al pago de la reparación del daño, al considerar que la reparación del daño tiene carácter de sanción y, había transcurrido en exceso el término de dos años previsto en el artículo 136 del Código Penal del Estado.

"En la misma audiencia, la agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra dicha determinación; el cual fue admitido por el Juez, el seis de agosto siguiente.

"IX. En veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la Décima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la resolución recurrida y, declaró 'improcedente' el incidente sobre prescripción de la reparación del daño al estimar esencialmente el término prescriptivo por lo que hace a la reparación del daño es el previsto en el artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no así el señalado en el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

"Resolución de apelación, contra la cual el quejoso promovió el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente recurso.

"Sentencia de amparo.

"El Juzgado de Distrito desahogó la audiencia constitucional el diez de enero de dos mil diecinueve y, dictó sentencia en la cual concedió el amparo. Esencialmente estimó:

"• En lo relativo a la prescripción de la reparación del daño se debe atender a los artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, no al Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

"• De los artículos 122, 123 y 136 del Código Penal del Estado, contenidos en el título séptimo, relativo a la extinción de la responsabilidad penal del Código Penal del Estado, capítulo VII de la prescripción, extemporaneidad y abandono de las querellas y, del diverso artículo 148 del título octavo de la responsabilidad pecuniaria derivada del delito, capítulo único, se desprende que las sanciones que no tienen establecido un término para la prescripción, entre las cuales se encuentra la responsabilidad de la reparación del daño, deben prescribir en el mismo lapso previsto para la prescripción de la multa, de dos años y, que se debe considerar como fecha de inicio de tal cómputo la notificación de la ejecutoria de la sentencia en la que se condene por ese concepto.

"• De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 148 del citado Código Penal el que se extinga la acción penal y la sanción, no trae como consecuencia que también se extinga la condena relativa a la reparación del daño porque ésta es independiente a aquellas instituciones, pero eso no implica que en relación con el tema de la condena para la reparación del daño resulten inaplicables los términos y formas de extinción a que alude el capítulo VII del título séptimo, del Código Penal, debido a que el precepto solamente aclara que si se determina extinta la acción penal y diversas sanciones, no debe hacerse extensiva tal declaración a la reparación del daño.

"• En la legislación mexicana la reparación del daño se ha instituido como una sanción pecuniaria, incluso de satisfacción preferente a la multa y, como debe hacerla el inculpado, adquiere el carácter de pena pública, por tanto, el Ministerio Público acusador está constreñido a exigirla de manera oficiosa; una vez impuesta el órgano ejecutor de sanciones debe velar por su exacta y debida satisfacción, tanto que en caso de obtenerla y sea rechazada por aquél en favor de quien se estableció, la reportará al erario público; eso encuentra aceptación en los artículos 141 y 142 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. También se refirió al artículo 143 de dicho código.

"• Es incorrecta la apreciación de la autoridad en cuanto a que la legislación penal no otorga a la reparación del daño, carácter de sanción, sino sólo el de consecuencia jurídica de responsabilidad por la comisión del delito y, que deben ser diferenciados, porque si bien el artículo 46 del Código Penal del Estado, no incluye la reparación del daño como sanción, ese concepto tiene carácter de pena pública y general para todos los delitos, se traduce en una sanción pecuniaria consistente en la obligación del delincuente de restablecer y resarcir los perjuicios derivados de su delito, por ende, es parte de la condena establecida en el procedimiento penal y, su cumplimiento se debe obtener

en la causa respectiva.

"• La autoridad refirió que una interpretación literal del artículo 136 del Código Penal del Estado sustantivo de la materia, arroja que el plazo de dos años para que opere la prescripción, únicamente es aplicable tratándose de multa o de las sanciones no sujetas a término, más de las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de delitos que no se encuentran en esa categoría, unido a que la responsabilidad pecuniaria derivada del delito denominada 'reparación del daño y perjuicio' se desarrolla en el título octavo del libro primero del código; lo que no se comparte porque de ese numeral y del diverso 148 deviene la forma en que se determina el periodo de tiempo para exigir la acción de pago de la pena proveniente de delito y cuándo empieza a correr el cómputo para la prescripción.

"• El término para que prescriba la acción para exigir la reparación del daño es de dos años, debido a que no está sujeta a término alguno y su cálculo comienza a correr a partir de la fecha en que fue notificado quien tiene derecho a dicha pecuniaria (sic) de la sentencia ejecutoria que condenó al acusado, porque hasta ese momento puede consumarse el perjuicio ocasionado.

"• Adverso a lo resuelto por la autoridad, el cómputo para la prescripción de la reparación del daño no deriva del artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, sino de la legislación penal estatal ya señalada, siendo el plazo para que opere el de dos años.

"• Si bien la reparación del daño se encuentra catalogada como una consecuencia jurídica acorde con el numeral 45 Bis del Código Penal de (sic) Nuevo León, no por eso deja de ser una pena pública; de ahí que sea aplicable el artículo 136 de dicho ordenamiento.

"• Es aplicable la jurisprudencia 43/2004, de rubro: 'REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).', en la cual si bien se analizó el artículo 116 del Código Penal para el Distrito Federal, es de similar contenido a los numerales 125 y 148 del Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León, debido a que todos establecen que el plazo para la prescripción de la reparación del daño corre a partir de la fecha en que causa ejecutoria la sentencia; de modo que ese criterio resulta aplicable para esta entidad federativa, por tanto, se debe considerar que el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la reparación del daño, inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena al acusado.

"• La reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, no son aplicables los numerales 1807, 1812, 1812 Bis y 1812 Bis II, del Código Civil del (sic) Estado de Nuevo León, contenidos en el libro cuarto, primera parte, título primero, capítulo V, denominado 'De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos', porque se refieren a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos o contrarios a las buenas costumbres, que producen algún daño, pero no a los que derivan de un acto delictuoso.

"• A la fecha en que se solicitó la prescripción de la condena a la reparación del daño, ya había transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León y, por ende, opera la prescripción de la sanción pecuniaria relativa al pago de la reparación del daño impuesta al aquí quejoso *****, mediante ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil quince.

"Efectos de la concesión de amparo.

"El a quo concedió el amparo para efecto de que la autoridad deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la cual ajuste su actuar a los lineamientos expuestos en el fallo protector.

"Incongruencia de las consideraciones de la sentencia constitucional.

"Previo al estudio de los agravios formulados por la autoridad recurrente, debe puntualizarse que el análisis de congruencia de las sentencias de amparo es de orden público y, por ello, de estudio oficioso lo aleguen o no las partes, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente la autoridad responsable pudiera darle a dicho fallo, evitando así ejecutorias forzadas e inconducentes que lleven a un imposible cumplimiento.

"Por tal razón, el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de revisión, válidamente puede corregir de oficio la incongruencia que advierta en la sentencia de amparo, ajustando los puntos resolutivos, las consideraciones que la rigen, o bien, anulando algunas de éstas.

"En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 133/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"**SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO.** Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: «**SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.**», en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele.»(1)

"Sentado lo anterior, oficiosamente se advierte que el fallo protector sujeto a revisión contiene

consideraciones incongruentes, atento a que, por una parte advirtió que la autoridad había errado al establecer que para la prescripción de la reparación del daño se debía atender al Código Civil para el Estado, en lugar de ceñirse a los artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León; que precisamente era aplicable el artículo 136 del último ordenamiento en cuanto a que el plazo para la prescripción es de dos años; y que ese plazo inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena al acusado.

"Por otra parte, el a quo se pronunció en la parte final de la sentencia, en el sentido que a la fecha en que se solicitó la prescripción de la condena a la reparación del daño, ya había transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León y, que por ende, había operado la prescripción de la sanción pecuniaria relativa al pago de la reparación del daño impuesta al quejoso, tal como en principio había decidido el Juez de Ejecución de Sanciones.

"Lo cual deviene incongruente porque, si el a quo en primer lugar destacó que la autoridad había errado al elegir las normas sustantivas que resultaban aplicables al caso, eso implicaba que la Sala no había examinado si estaba prescrita o no la reparación del daño al tenor de las disposiciones del Código Penal del Estado.

"Por ende, el órgano de amparo no estaba en aptitud de establecer que en el procedimiento penal de origen se actualizaban los supuestos del artículo 136 del Código Penal del Estado y que había operado la prescripción, sencillamente porque en esos términos se estaba sustituyendo a la autoridad, en la medida que ésta, debido a su yerro, no había hecho el examen correspondiente.

"De ahí que, si el Juzgado de Distrito impuso como efecto del amparo, que la autoridad dicte una nueva resolución en la cual ajuste su actuación a los lineamientos expuestos en el fallo protector; entonces dichos efectos no son del todo acordes con la violación destacada en primer lugar.

"Ciertamente, dicha violación consistió en la indebida remisión que la autoridad hizo a las disposiciones del Código Civil del Estado, por tanto, el efecto del amparo debía ceñirse a que la Sala dejara insubsistente la resolución reclamada y, en la nueva que dictara, partiera de la base de que las disposiciones aplicables eran las del Código Penal del Estado, que la prescripción de la reparación del daño está sujeta al plazo de dos años establecido en el artículo 136 del Código Penal del Estado y, que éste es computable a partir de que se notificó al ofendido la ejecutoria que impuso esa pena.

"Mas no había lugar a imponer a la autoridad, los lineamientos en los cuales estableció que había prescrito la reparación del daño porque ya había transcurrido el plazo señalado en el citado artículo 136.

"Por ende, el efecto del amparo no guarda congruencia con la violación advertida, atento a que la reparación que impone a la autoridad va más allá de la mera orden de que decida con base en las disposiciones legales aplicables y, se perfila a fijar el sentido de la determinación.

"Corolario, las consideraciones jurídicas del a quo a través de las cuales concluyó que en la especie había prescrito la reparación del daño devienen incongruentes y se proyectaron hacia los efectos del fallo protector, en la medida que se dieron directrices a la autoridad para definir la cuestión en el sentido de que estaba prescrita la reparación del daño.

"Por tal razón, este tribunal a fin de reparar la incongruencia de la que adolece la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo por las violaciones verdaderamente cometidas, al no existir la figura del reenvío en el presente recurso, procede a dejar sin efectos las consideraciones en las cuales se afirmó que en la especie había prescrito la reparación del daño y, los efectos del amparo fijados por

el Juez Federal.

"En cambio, determina que para reparar la violación procesal detectada, lo procedente era conceder el amparo para efecto de que la autoridad:

- Dejara insubsistente la resolución reclamada.

- En una nueva que dictara, estableciera que para la prescripción de la reparación del daño se debía atender al Código Penal para el Estado de Nuevo León; que precisamente era aplicable el artículo 136 de dicho ordenamiento en cuanto a que el plazo para la prescripción es de dos años y que ese plazo inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena al acusado.

- Con plenitud de jurisdicción, resolviera conforme a derecho el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.

"Agravios.

"La autoridad tercero interesada, fiscal general de Justicia del Estado, interpuso el presente recurso de revisión.

"De modo que el análisis de sus agravios debe regirse por el principio de estricto derecho, ya que en materia penal, la suplencia de la queja sólo opera a favor del inculpado o sentenciado y de la víctima u ofendido en casos específicos en que tengan carácter de quejoso o adherente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo.

"Así, interpretado en contrario ese precepto, deriva que sus supuestos no incluyen a la autoridad tercero interesada como destinatario de dicha suplencia.

"Por ende, la impugnación se analizará bajo el principio de estricto derecho, acorde con el cual el recurrente tiene la obligación de combatir todos y cada uno de los argumentos torales en que el órgano de amparo se basó para otorgar a la quejosa la protección solicitada, sobre todo debido a que el Ministerio Público es un órgano de carácter eminentemente técnico.

"Esto es, los agravios hechos valer por el recurrente deben constituir verdaderos argumentos directamente encaminados a combatir las consideraciones torales en que se fundamentó el fallo recurrido, sin que se pueda subsanar de oficio alguna deficiencia de esos planteamientos.

"Como se adelantó, los agravios resultan infundados en parte y de estudio innecesario en lo demás.

"En efecto, el recurrente plantea (primer agravio) que el Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León no asigna a la reparación del daño las categorías de pena o sanción y, que resultado de ello, es incorrecto que la prescripción de la reparación del daño esté regulada en términos de ese ordenamiento.

"Particularmente esgrime que:

- La resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada; es inexacto lo considerado por el Juez de Distrito al dar razón al quejoso en el sentido de que la autoridad debió atender a las reglas del Código Penal y no a las del Código de Procedimientos Civiles (sic) para el Estado de Nuevo León.

"• Se incurrió en incorrecta interpretación y aplicabilidad de las reglas imbibitas en dichos ordenamientos jurídicos porque, contrario a lo estimado en la sentencia, la reparación del daño no fue considerada por el legislador del Estado de Nuevo León como sanción, ni como pena, según se desprende del artículo 46 del Código Penal del Estado que no incluye específicamente la reparación del daño como 'sanción'; que entonces el fallo recurrido entraña una inadecuada fundamentación y motivación.

"• La reparación del daño es de orden público y, eso implica (sic) sea de aplicación general y observancia obligatoria, sin que por esa razón constituya una sanción.

"• En el título octavo del libro primero del Código Penal, el legislador dejó fuera de las sanciones aplicables (previstas en el artículo 46 de ese ordenamiento) por la comisión de delitos, a las responsabilidades pecuniarias previstas en el artículo 45 Bis como consecuencias jurídicas de responsabilidad por la comisión del delito.

"• Si bien el artículo 141 de dicho título, previene que toda persona responsable de un hecho delictuoso, lo es también por el daño y perjuicio causado por el mismo y, que esa responsabilidad es de orden público respecto de los penalmente responsables; eso no determina que la reparación del daño sea intrínsecamente una sanción, que en términos de ley se trata de una consecuencia de responsabilidad del delito.

"• Las tesis citadas en la sentencia recurrida con los rubros: 'REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL. TIENE EL CARÁCTER DE PENA PÚBLICA Y NO REQUIERE EL ACREDITAMIENTO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ACUSADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).' y 'REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO, ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR AL INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN PECUNARIA, APLICADA COMO PENA PÚBLICA.', resultan inaplicables porque la primera se refiere al artículo 31 del Código Penal de Michoacán y, la segunda alude a los numerales 30, fracción V y 37 del Código Penal para el Distrito Federal, pero dichos preceptos expresamente señalan la reparación del daño como pena, mientras que en el Código Penal de (sic) Nuevo León no existe disposición en el sentido que la reparación del daño sea sanción o pena.

"• Al conceptuarse la reparación del daño como de orden público y consecuencia jurídica de responsabilidad, no como sanción, eso diferencia su aplicabilidad y observancia.

"Lo aducido es infundado.

"Como se ve, frente a la conclusión del Juzgado de Distrito, el recurrente plantea que si la reparación del daño no se encuentra específicamente prevista como sanción en el artículo 46 del Código Penal del Estado de Nuevo León, entonces no le es aplicable la prescripción tal como la regula dicho código.

"No le asiste la razón.

"En efecto, los artículos 45 Bis y 46 de dicho código sustantivo, establecen:

"'Artículo 45 Bis. Son consecuencias jurídicas de responsabilidad por la comisión del delito las siguientes:

"I. Sanciones;

"II. Medidas de seguridad; y

"III. Reparación del daño y perjuicio.'

"Artículo 46. Las sanciones aplicables por la comisión de delitos, son:

"A) Prisión;

"B) Multa;

"C) Trabajo en beneficio de la comunidad;

"D) Inhabilitación, suspensión y privación de derechos;

"E) Caución de no ofender;

"F) Amonestación;

"G) Publicación especial de sentencia;

"H) Confinamiento;

"I) Suspensión, disolución o intervención de sociedades; o prohibición de realizar determinados actos;

"J) Pérdida a favor del Estado, de los instrumentos del delito, cosas, bienes o valores provenientes directa o inmediatamente de su realización, así como de aquellos que constituyan para el agente un provecho derivado del mismo delito, sean de uso prohibido o lícito;

"K) Destrucción de cosas nocivas o peligrosas; y

"L) Las demás que fijen las leyes.

"Además de los casos previstos en este código, el Juez podrá aplicar cualquiera de las sanciones señaladas en los incisos d) al i), tomando en cuenta las circunstancias concretas de cada delito, aun cuando no estuvieren establecidas expresamente.

"El responsable de un delito cometido en agravio de una persona frente a la cual tenga derechos de patria potestad o tutela, o derechos hereditarios o de alimentos, adicionalmente podrá ser condenado a la pérdida de tales derechos. En todo caso continuarán vigentes los derechos hereditarios o de alimentos que la víctima tenga respecto del responsable del delito.' (el subrayado es añadido).

"Por otro lado, los artículos 141 a 147 de ese ordenamiento establecen:

"Artículo 141. Toda persona responsable de un hecho delictuoso, lo es también por el daño y perjuicio causado por el mismo. Esa responsabilidad es de orden público respecto a los penalmente responsables, por lo que en todo proceso el Ministerio Público estará obligado a solicitar, en su caso, la condena correspondiente y el Juez a resolver lo conducente, con independencia de que comparezca o no persona interesada.

"En caso de incumplimiento a la anterior disposición, de oficio, o a petición de la víctima o el ofendido según la definición contenida en la ley de atención y apoyo a las víctimas y a los ofendidos

de delitos, conocerán del asunto el procurador general de Justicia o el Consejo de la Judicatura del Estado, en su caso, y si de las constancias se acredita la omisión, se impondrá una sanción administrativa de 300 a 450 cuotas si fuere responsable el Ministerio Público y de 600 a 750 cuotas en el caso de un Juez de primera instancia, y suspensión en ambos supuestos, sin goce de sueldo, por un periodo de 30 días naturales. En caso de reincidencia se aplicará invariablemente la destitución del cargo.'

"Artículo 142. Deben reparar el daño y perjuicio a que se refiere el artículo anterior: los penalmente responsables en forma solidaria; y mancomunadamente sus herederos que acepten la herencia y los que conforme a la ley civil están obligados a repararla.'

"Artículo 143. La reparación del daño comprende:

"I. La restitución de las cosas obtenidas por el delito; de no ser posible, el pago del precio de las mismas;

"II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago del tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médico-psicológica de la persona agredida, que como consecuencia del delito sea necesario para la recuperación de su salud;

"III. En los casos de estupro, violación y rapto, comprenderán los gastos de gestación, alumbramiento, y en su caso los gastos funerarios, así como el pago de los alimentos a las hijas e hijos, si los hubiere, y cuya concepción sea consecuencia de la comisión de estos delitos. Tratándose del delito de violación, comprenderá igualmente los gastos por la atención médica o psíquica del ofendido, hasta su total recuperación;

"IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el delito cometido; y

"V. En el caso de los delitos contra la libertad, comprenderá, a favor de la víctima y de sus familiares; los gastos de los tratamientos médicos, los gastos de las terapias psicológicas, los ingresos perdidos, salarios caídos, el resarcimiento de los perjuicios ocasionados, la devolución de los bienes o dinero mediante los cuales se realizó el pago del rescate y el resarcimiento derivado de cualquier otro daño o perjuicio sufrido por la víctima o sus familiares que haya sido generado por la comisión del delito.

"Si la parte ofendida, sus familiares o sus dependientes económicos, en su caso, renunciaren a la reparación o no se presenta persona alguna con derecho a reclamar su importe, éste se aplicará al Estado para el mejoramiento del sistema integral de justicia.'

"Artículo 144. La reparación del daño y perjuicio a que se refieren las fracciones II y IV del artículo anterior, será fijada por los Jueces tomando en cuenta las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y el Código Civil vigente en el Estado, sin perjuicio de valorarlas proporcionalmente según el daño y perjuicio causado, el delito cometido, lo obtenido por el delito, las condiciones de la víctima, y especialmente las condiciones económicas del obligado a pagarlo, pero tratándose de homicidio será conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, para el caso de muerte.'

"Artículo 145. Están obligados a reparar los daños y perjuicios, como responsabilidad civil, en la forma y términos que fije el Código de Procedimientos Penales:

"I. Quienes ejerzan la patria potestad, los tutores en ejercicio y los que tengan la guarda o custodia legal de los incapacitados, en los términos del Código Civil del Estado;

"II. Los patrones, empresas, negociaciones, personas morales, talleres, por los delitos cometidos por sus funcionarios, empleados, obreros, encargados, representantes, apoderados, con los medios que se les proporcionen o en beneficio o representación de los primeros, o con ocasión de las actividades o funciones que les fueren encomendadas;

"III. La Federación, el Estado y los Municipios, por los delitos cometidos por sus servidores públicos en el ejercicio de sus cargos; y

"IV. Todas las personas físicas, o las morales a las que el Código Civil, este código o cualquier otra disposición jurídica, les confiera responsabilidad por actos de terceros.'

"Artículo 146. La reparación del daño y el perjuicio, resulta preferente ante cualquier crédito pasivo del obligado a reparar el daño, distinto de los créditos señalados como preferentes en cualquier ordenamiento.'

"Artículo 147. El Código de Procedimientos Penales determinará la forma para hacer efectiva la reparación del daño, y en tanto éste no se cubra o garantice, no se concederán los beneficios que marca la ley en los casos en que se exige tal requisito.'

"Ahora bien, la reparación del daño en materia penal se aplica al momento de la individualización de la pena, pues en términos del artículo 141 transcrito, debe ser impuesta por el Juez a toda persona responsable de un hecho delictuoso, por el daño y perjuicio causado por el mismo.

"Se trata de una responsabilidad de orden público respecto a los penalmente responsables.

"De tal suerte que, si bien el artículo 45 Bis del Código Penal en cita cataloga como consecuencias jurídicas de responsabilidad por la comisión del delito, por separado las (I) sanciones; las (II) medidas de seguridad; y, (III) la reparación del daño y perjuicio y, por otra parte, el artículo 46 deja de señalar expresamente como sanción aplicable por la comisión del delito la reparación del daño en los incisos A) a K), esto atiende a la especial naturaleza de la reparación del daño, que más bien se ubica en el inciso L), el cual alude a las demás sanciones que señalen las leyes.

"Exacto, la reparación del daño en materia penal es constitutiva de una 'pena' o 'sanción pública' impuesta al gobernado mediante sentencia, por tanto, al incluirse dicha figura dentro del derecho penal, su determinación y cuantificación debe regirse por los principios de integralidad, efectividad y proporcionalidad aplicables a la materia.

"A la vez que satisface una función social, en su carácter de pena; por otro la reparación del daño tiene una función privada al contribuir a resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido del delito, que con motivo de la comisión de un ilícito penal, lo que trae, a su vez, para el agente del delito una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo que, por imperativo del artículo 20 de la Constitución Federal, necesariamente debe dar lugar a una reparación del daño en el proceso penal.

"Lo anterior, independientemente si la víctima u ofendido decide ejercer una acción particular, en virtud de que ambas reparaciones (aun con un mismo origen) son autónomas y pueden subsistir una y otra, pues la responsabilidad civil (objetiva y subjetiva) nacida de la comisión de un ilícito penal no cesa porque dicha conducta se haya sancionado mediante la aplicación del derecho punitivo, antes bien, subsiste con sujeción a las reglas del derecho civil, ya que si bien ambas pudieron haber tenido el mismo origen, tienen una naturaleza distinta.

"Entonces, los tipos de responsabilidad que resultan de la comisión de un delito son: (i) La

reparación del daño en la vía penal deriva de una responsabilidad de índole subjetiva, se genera cuando se emite una sentencia condenatoria y constituye una pena derivada de que se ha estimado la responsabilidad del sujeto activo; y, (ii) En la responsabilidad civil objetiva se encuentra ausente el elemento subjetivo, se produce por el uso de mecanismos que son peligrosos en sí mismos.

"Ahora, con sujeción al artículo 143 del Código Penal del Estado, la reparación del daño comprende, entre otros elementos, la restitución de las cosas obtenidas por el delito, de no ser posible, el pago del precio de las mismas; así como la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago del tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médico-psicológica de la persona agredida, que como consecuencia del delito sea necesario para la recuperación de su salud.

"Bajo ese marco normativo, es claro que la reparación del daño es en realidad una vertiente de pena pecuniaria atento a que se encuentra dirigida al restablecimiento de la situación anterior a la comisión del delito y, de no ser esto posible, se debe determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, como lo es establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados, a fin de resarcir a las víctimas en el goce de sus derechos producidos por la violación o por cualquier medida o situación que provocó la afectación.

"Empero, la distinción realizada por el legislador, al no incluirla por su denominación, como sanción en los incisos A) a K) del artículo 46 del Código Penal del Estado descansa en que, si bien la reparación del daño comparte con la multa como sanción, su carácter de afectación pecuniaria, aquélla tiene un carácter autónomo.

"Lo anterior atento a que la multa regularmente se encuentra establecida por parámetros mínimo y máximo por el legislador en la norma penal; en tanto que la reparación del daño depende de la existencia de factores que demuestren que la conducta ilícita haya generado una afectación, la cual puede ser de variada naturaleza e intensidad, que deba ser resarcida.

"Esto es, mientras los parámetros de determinación de la sanción de multa están definidos en la norma penal que establece la punibilidad de la conducta delictiva cometida y se fija de acuerdo al reproche que refleje el grado de culpabilidad asignado al sentenciado.

"En cambio, la reparación del daño no se fija de acuerdo a límites máximos y mínimos de punibilidad, sino que depende de lineamientos legales y de los hechos que se prueben en actuaciones, que tienen la finalidad de justificar la imposición de la sanción en los rubros que correspondan de acuerdo a la conducta ilícita cometida, entre ellos la reparación material, moral, física y psicológica.

"Todo lo cual lleva a establecer, como hizo el a quo, que la reparación del daño en el Código Penal del Estado, tiene la calidad de sanción; con previsión en el artículo 46 Bis, inciso L), en relación con los diversos artículos 142 y 143 de dicho ordenamiento.

"Conclusión que está en consonancia con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2384/2013, en sesión del siete de febrero de dos mil catorce.

"Lo anterior, porque en ese expediente se analizó la constitucionalidad del artículo 143, fracción I, del Código Penal para el Estado de Nuevo León y, dicho examen el Alto Tribunal lo realizó a partir del contexto normativo donde se encuentra inserta dicha norma, a saber, el libro primero, parte general, título cuarto, penas, capítulo I, disposiciones generales y, título octavo, capítulo único,

responsabilidad pecuniaria derivada del delito, con base en los artículos 46 y 141 a 148, de cuya intelección desprendió:

"... 56. Del marco normativo referenciado se desprende que la reparación del daño es una sanción aplicable por la comisión de delitos, cuya responsabilidad es atribuible a la persona declarada también responsable de la comisión del hecho delictivo del que derive. Responsabilidad que es de orden público respecto a los penalmente responsables, por ello, el Ministerio Público está obligado a solicitar la condena correspondiente y el Juez a resolver lo conducente, con independencia de que comparezca o no la persona interesada.' (el subrayado es añadido).

"Sin que favorezca al recurrente lo manifestado acerca de las tesis citadas por el a quo, de rubros: 'REPARACIÓN DEL DAÑO MATERIAL. TIENE EL CARÁCTER DE PENA PÚBLICA Y NO REQUIERE EL ACREDITAMIENTO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ACUSADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).' y 'REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO, ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADOR AL INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN PECUNARIA, APLICADA COMO PENA PÚBLICA.', atento a que con independencia de los preceptos interpretados en esos criterios, aquí quedaron señaladas las razones jurídicas para establecer que la reparación del daño es una sanción prevista en el Código Penal del Estado de Nuevo León.

"En otro aspecto, el recurrente señala que el órgano de amparo desatinó al indicar que la forma para determinar la prescripción de la acción de reparación del daño, es la relativa a la de las penas que no están sujetas a término y, que su cálculo empieza a correr a partir de la fecha en que fue notificado quien tiene derecho, de la sentencia ejecutoriada que condenó al acusado, con apego a los artículos 136 y 148 del Código Penal del Estado, porque la reparación del daño no es una sanción no sujeta a término, como las consistentes en trabajo en beneficio de la comunidad, amonestación, caución de no ofender, publicación especial de sentencia y las demás que fijen las leyes, sin comprender a la reparación del daño.

"Lo anterior es infundado.

"Cierto, en primer término, ya se estableció que la reparación del daño constituye una sanción en términos del Código Penal del Estado.

"Además, se tiene que el artículo 147 de dicho código establece que el Código de Procedimientos Penales determinará la forma para hacer efectiva la reparación del daño, y en tanto éste no se cubra o garantice, no se concederán los beneficios que marca la ley en los casos en que se exige tal requisito.

"Esa disposición evidencia de manera inequívoca que la efectividad y, en su caso, la prescripción de la obligación correspondiente a la reparación del daño está regida por los ordenamientos de naturaleza penal.

"Además, el mismo Código Penal en sus artículos 122, 123, 125, 136, 138 y 148, establece:

"'Artículo 122. Por la prescripción se extinguen la acción penal y el derecho para ejecutar las sanciones, conforme a los siguientes artículos.'

"'Artículo 123. La prescripción es personal, y para ello bastara el simple transcurso del tiempo señalado por la ley.

"'La prescripción producirá su efecto aunque no la alegue el acusado.

"Tratándose de la acción penal, los Jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso.

"La prescripción de la sanción se decretará por la autoridad judicial que la hubiera impuesto."

"Artículo 125. Los términos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se substraiga a la acción de la autoridad, si las sanciones son privativas de libertad; y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria."

"Artículo 136. La multa prescribe en dos años; en igual forma prescriben las sanciones no sujetas a término.

"Las demás sanciones prescriben por el transcurso de un periodo igual al que debían durar y una cuarta parte más, pero nunca excederán de sesenta años." (el subrayado es añadido).

"Artículo 138. La prescripción de las sanciones privativas de libertad sólo se interrumpe aprehendiendo al reo, aunque la aprehensión se ejecute por otro delito diverso.

"La prescripción de las obligaciones económicas impuestas al reo, sólo se interrumpe por el embargo de bienes para hacerlas efectivas." (el subrayado es añadido).

"Artículo 148. La prescripción de la responsabilidad a la que se refiere este capítulo no corre sino hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada.

"Las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, no se extienden a las responsabilidades a que se refiere este capítulo." (el subrayado es añadido).

"De los anteriores preceptos legales, en lo que importa, se desprende que por la prescripción se extingue la acción penal y el derecho para ejecutar las sanciones, para lo cual bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley.

"Asimismo, que los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la autoridad, si las sanciones son privativas de libertad, y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria.

"Igualmente, de esos preceptos deriva que la multa prescribe en dos años y en igual forma prescriben las sanciones no sujetas a término, así como que la prescripción de las obligaciones económicas impuestas al reo, sólo se interrumpe por el embargo de bienes para hacerlas efectivas.

"Por último, que la prescripción de la responsabilidad pecuniaria derivada del delito no corre sino hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada.

"Luego, si la reparación del daño tiene contenido económico-restaurativo, mas no privativo de libertad, se trata de una sanción no sujeta a término, por tanto, está claramente sujeta a la previsión del artículo 136, primer párrafo, en el sentido que en igual forma que la multa, prescribe en dos años.

"Por otra parte, precisa destacar que en la jurisprudencia 43/2004 (sic), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la reparación del daño, inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al

ofendido la ejecutoria correspondiente, bien sea por medio de publicación o personal, según corresponda.

"La jurisprudencia en comentario es la de rubro y texto:

"REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De lo que señala el artículo 116 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en relación con los diversos artículos 57, 80, 81, 82, 87, 90 y 91 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se concluye que el cómputo del plazo de dos años para que opere la prescripción de la reparación del daño que prevé el mencionado artículo 116, inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria de la resolución, bien sea por medio de la publicación correspondiente o personal, según corresponda al caso, pues de acuerdo con lo establecido por el código adjetivo referido, todas las resoluciones deben ser notificadas.'

"Cabe puntualizar que, si bien en la aludida jurisprudencia se analizó el artículo 116 del Código Penal para el Distrito Federal, lo cierto es que éste prevé una regla similar a la contenida en los artículos 125 y 148 del Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León, pues coinciden en que el plazo para la prescripción corre a partir de la fecha en que causa ejecutoria la sentencia; de modo que el criterio jurisprudencial citado también resulta aplicable para esta entidad federativa y, por ende, debe considerarse que el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la reparación del daño, inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena al acusado.

"Esta conclusión reitera el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 163/2014, resuelto en sesión del veintitrés de octubre de dos mil catorce, en el sentido que debe considerarse que el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la reparación del daño, inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena al acusado.

"Además, no asiste la razón al recurrente cuando afirma que la prescripción no comprende la reparación del daño.

"En efecto, el artículo 148, primer párrafo, del Código Penal del Estado, se establece específicamente a la prescripción de la responsabilidad a la que se refiere el capítulo en que está inmersa, es decir, el capítulo único, del título octavo, alusivo a la responsabilidad pecuniaria derivada del delito y, precisamente ese capítulo es el que regula lo relativo a la reparación del daño.

"De modo que acoger el planteamiento del recurrente, de plano implicaría vaciar de contenido el precitado artículo 148, primer párrafo.

"También plantea el recurrente (segundo agravio), que el a quo omitió tomar en cuenta el segundo párrafo del artículo 148 del Código Penal del Estado, que ordena excluir la aplicabilidad de cualquier causa de extinción de dicho código respecto de la reparación del daño.

"Lo anterior es infundado.

"En efecto, es incorrecto que el a quo hubiese incurrido en omisión, pues adverso a lo que sostiene el recurrente, se pronunció acerca del segundo párrafo del artículo 148 del citado Código Penal y, de su interpretación derivó tajante que el que se extinga la acción penal y la sanción, no trae como consecuencia la extinción de la condena relativa a la reparación del daño por ser ésta independiente de aquellas instituciones.

"Además, acotó que eso no hacía inaplicables los términos y formas de extinción a que alude el capítulo VII, del título séptimo, del Código Penal, porque el precepto sólo aclara que si se determina extinta la acción penal y diversas sanciones, no debe hacerse extensiva tal declaración a la reparación del daño.

"Sin que contra esas específicas consideraciones del Juez de Distrito se hubiese enderezado disenso.

"Ahora, el recurrente indica que derivado de la aducida omisión del a quo, inobservó que el numeral 148 ordena excluir la aplicabilidad de cualquier causa de extinción de dicho código respecto de la reparación del daño y, de ese modo deja el ejercicio o aplicación a la vía civil, en la cual la prescripción se rige por el artículo 1156 del Código Civil del Estado que establece el lapso de diez años para la prescripción.

"En consonancia con lo anterior plantea que, contrario a lo estimado en la sentencia recurrida, la autoridad estuvo en lo correcto al determinar que debía estarse a legislación civil, debido a que se carecía de disposición legal del ámbito penal para determinar el plazo de la prescripción de la acción para ejecutar una sentencia de condena al pago de la reparación del daño, con precisión al artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles del (sic) Estado de Nuevo León, que prevé que el plazo es de diez años para que prescriba.

"También deriva que la autoridad determinó correctamente que la acción de reparación del daño no se encontraba prescrita y, que el Juzgado de Distrito aplicó una regla contraria a la establecida para el ejercicio de la acción reparadora.

"Además sostiene que, si bien los artículos 1807, 1812, 1812 Bis y 1812 Bis II, del Código Civil del Estado se refieren a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos o contrarios a las buenas costumbres, que producen algún daño, pero no a los que derivan de un acto delictuoso, para corroborar que lo atinado de la resolución reclamada, se debe tener en cuenta que el artículo 1156 de dicho código dispone: 'Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, contados desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento', así como el artículo 1158, fracción V, por cuanto establece que prescribe en dos años la responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos.

"Igualmente indica que dichos preceptos se encuentran dentro del capítulo 'De la prescripción negativa' y, más adelante, en el capítulo 'De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos', el artículo 1831 expresa: 'La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño.'

"Añade que tratándose de actos ilícitos que constituyan delitos, el derecho para reclamar el pago de la reparación del daño prescribe en el término general de diez años y, que eso armoniza con la normativa penal en tanto exceptuó a la reparación del daño como sanción, para colocarla en el apartado de consecuencias jurídicas de responsabilidad y, descartar que las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, puedan extenderse a las responsabilidades como la de reparación del daño.

"Todo lo aducido es inoperante.

"Resulta así porque la determinación del Juez de Distrito, está fincada en que el Código Penal es el que establece las reglas de prescripción respecto del derecho a hacer efectiva la reparación del

daño y son las que deben observarse.

"Mientras que los planteamientos del recurrente para desvirtuar lo anterior no prosperaron.

"En otro aspecto, el recurrente plantea (agravio tercero) que se omitió tener en cuenta que la reparación del daño tiene una connotación de índole civil.

"Que si bien constituye un derecho constitucional que se le repare el daño a la víctima u ofendido dentro del procedimiento penal no pierde su esencia de carácter civil y, por tanto, sólo puede declararse prescrita a través de la legislación misma que lo regula y a que pertenece, la civil; en ese sentido es que se debió interpretar el artículo 148 del Código Penal del Estado, por cuanto dispone que la prescripción de la responsabilidad a la que se refiere ese capítulo no corre sino hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada y, que las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, no se extienden a las responsabilidades a que se refiere tal capítulo, o sea a las pecuniarias.

"También sostiene que en términos del artículo 479 del Código de Procedimientos Penales del Estado, la acción para pedir la ejecución de una sentencia por lo que hace a la reparación del daño prescribirá a los diez años, contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado.

"Añade que el Juez de Distrito identificó la reparación del daño, como una pena pública y general para todos los delitos, que se traduce en una sanción pecuniaria, pero soslayó que por un lado satisface una función social y, por otro, una función privada y eso genera para el activo, una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo, de modo que necesariamente debe tener lugar la reparación del daño en el proceso penal, independientemente de que la víctima u ofendido decidan ejercer una acción particular y, que la responsabilidad pecuniaria derivada del delito consistente en la reparación del daño y perjuicio, no es susceptible de cesar en los términos que la legislación penal estatal establece para la extinción de la acción penal y de la sanción.

"Lo aducido es infundado, porque si bien el a quo dejó profundizar en la naturaleza civil de la reparación del daño, no estaba obligado a hacerlo atento a que la materia de análisis consistía en el acto reclamado, el cual se vincula con la petición efectuada por el sentenciado en el sentido de declarar la prescripción de la reparación del daño dentro del procedimiento penal.

"De ahí que, si el Juzgado de Distrito alcanzó convicción en el sentido de que el derecho para solicitar la reparación del daño es susceptible de prescripción en el procedimiento penal, no era su tarea esclarecer si las vías civiles aducidas por la autoridad eran correctas para exigir el pago de la reparación del daño proveniente de actos delictivos.

"Con todo, cabe resaltar, el hecho de que la reparación del daño se reclame a través del ejercicio de la acción penal no excluye o elimina el carácter civil de la misma; tampoco impide que se ejerza la acción correspondiente en la vía civil.

"Cierto, la reparación del daño en materia penal satisface tanto una función social, en su carácter de pena o sanción pública, como una función privada, en la medida en que también contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva.

"En efecto, la reparación del daño implica una sanción pública o una pena, en el sentido de que cumple una función social que se hace exigible de oficio por el Ministerio Público. Sin que eso elimine el fin primordial de la reparación del daño, consistente en resarcir a las víctimas u ofendidos de un delito, de las afectaciones a sus bienes jurídicos.

"De ahí que la valoración de los daños y su correlativa reparación tienen una naturaleza propia, independiente a los códigos o legislaciones en que se encuentren regulados, penales, administrativas o civiles, porque la naturaleza de una norma no puede hacerse depender del cuerpo legal en que se halle encuadrada sino de la esfera jurídica en que produce sus efectos.

"Así, la responsabilidad civil exdelito constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual y se caracteriza porque el acto ilícito que la genera es constitutivo de delito.

"De lo anterior se colige que la reparación de los daños derivados de un delito puede ser reclamada en diversas vías: (i) en la vía administrativa cuando el responsable sea el Estado; (ii) en la vía civil, tratándose de responsabilidad extracontractual derivada de un delito; y, (iii) en la vía penal, por solicitud del Ministerio Público dentro de la misma causa penal.

"Dichas consideraciones hacen eco de las plasmadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4646/2014, en sesión de catorce de octubre de dos mil quince.

"Ahora, el Código Penal del Estado, al prever la reparación de los daños en la vía penal, pretendió evitarle a la víctima la necesidad de instaurar un juicio civil por daños, atento a que es factible reparar de manera simultánea a la sentencia penal, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado con el delito.

"Así, visto que la finalidad de incluir la reparación del daño en el procedimiento penal pretendió ahorrarle tiempo y recursos a la víctima, al evitarle el promover un juicio civil, eso no cambia la naturaleza de la reparación, ni desecha que ésta sea justa e integral, a efecto de que se subsanen debidamente las afectaciones a las víctimas.

"Inclusive, al resolver la contradicción de tesis 227/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que una vez que en un proceso penal se ha condenado a la reparación del daño, por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso civil la reparación de ese mismo daño.

"No obstante, consideró que cuando no se haya reparado a la víctima de manera suficiente, ésta podría acudir a la vía civil para reclamar la indemnización faltante.

"De la ejecutoria correspondiente emergió la jurisprudencia 1a./J. 43/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, materia civil, página 478, de rubro (sic) y texto:

"RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO. Una vez que en un proceso penal se ha condenado a la reparación del daño, por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso civil desvinculado del proceso penal la responsabilidad objetiva del propio inculpado o de un tercero, toda vez que en ambos casos la responsabilidad civil que se reclama en ese segundo proceso es con motivo de la misma acción y el mismo daño. En este sentido, debe señalarse que la responsabilidad civil subjetiva derivada de un delito no tiene una «naturaleza distinta» a la responsabilidad civil objetiva. No obstante, en el supuesto antes señalado, excepcionalmente podrá acudirse a la vía civil cuando pueda apreciarse claramente que la legislación civil permite una mayor amplitud indemnizatoria en comparación con la legislación penal, de tal manera que la acción de reparación de daño en la vía civil pueda dar lugar a un mayor beneficio económico como resultado de una regulación más favorable para la

víctima de la cuantificación del daño. Desde luego, dicha excepción no implica que en este supuesto el ofendido pueda hacer exigible la reparación del daño en la vía civil de manera completamente autónoma. La cantidad que eventualmente se conceda por concepto de reparación del daño en el proceso civil deberá descontar la indemnización que se haya cubierto con motivo de la condena decretada en el proceso penal.'

"En ese tenor, la sentencia recurrida no prejuzga sobre la posibilidad legal de que la víctima ejerza en diversa vía las acciones correspondientes para lograr la reparación del daño generado con motivo de los hechos delictivos.

"Por otra parte, el recurrente esgrime (cuarto agravio) que el Juez de Distrito omitió atender correctamente los postulados de los artículos 1o. y 20, apartado C, fracción IV, en vinculación con el principio pro persona, debido a que la prescripción de la reparación del daño pudiera beneficiar al sentenciado, pero al mismo tiempo implicar un perjuicio para la víctima u ofendido; de ahí que no podía sopesarse lo relativo a la reparación del daño en función de los derechos del sentenciado, sin atender los que corresponden a la víctima u ofendido.

"Además indica que se debe tener en cuenta lo establecido por los artículos 141, 142, 143 y 144 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, así como los diversos 1, 2, 4 y 7 de la Ley General de Víctimas, así como el transitorio tercero de ésta porque esos preceptos no establecen naturaleza especial, ni tiempo para solicitar la reparación del daño; de modo que si la hipotética aplicación del artículo 136 del Código Penal del Estado en lo relativo a los dos años para la prescripción, no tuviera otra interpretación, eso contravendría el derecho establecido a nivel constitucional, en el artículo 20, apartado C.

"Lo aducido es inoperante, cuenta habida que en los términos ya indicados, la sentencia recurrida de ninguna manera establece que esté vedado para la víctima el ejercicio de los derechos que le asisten, a través de la vía civil.

"La misma suerte corren los planteamientos del recurrente en el sentido de que ninguna de las tesis invocadas por el a quo, se emitió considerando el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos con origen a partir del diez de junio de dos mil once y, que la resolución recurrida se encuentra inadecuadamente sustentada, porque no se analizó a través de esos precedentes cuándo se actualiza la prescripción del derecho a la reparación del daño conforme a la legislación del Estado de Nuevo León, ni se atendió al principio pro persona y, tampoco se ponderaron los derechos del sentenciado frente a los de la víctima u ofendido.

"Lo anterior debido a que dichos planteamientos redundan en cuanto a que se desconoció el derecho de la víctima a la reparación del daño, cuando en los términos aquí expuestos es factible que la víctima acuda a la vía civil en aras de obtener una mayor amplitud indemnizatoria en comparación con la legislación penal, descontando la indemnización cubierta en el procedimiento penal.

"Ahora, como los planteamientos del recurrente resultaron ineficaces, las consideraciones del órgano de amparo, diversas de las aquí declaradas sin efectos, deben seguir rigiendo el sentido del fallo.

"En esa tesitura, al haberse dejado sin efecto legal alguno las consideraciones incongruentes del fallo impugnado que destacó oficiosamente este órgano colegiado, vinculadas con la determinación de que en el caso concreto había prescrito la reparación del daño; lo que procede es confirmar la sentencia que concede el amparo al quejoso y, acotar que los efectos de dicha protección consisten en que la autoridad deberá:

"• Dejar insubsistente la resolución reclamada.

"• En una nueva que dicte, establecer que para la prescripción de la reparación del daño se debe atender al Código Penal para el Estado de Nuevo León; que precisamente es aplicable el artículo 136 de dicho ordenamiento en cuanto a que el plazo para la prescripción es de dos años y; que ese plazo inicia a partir del día siguiente al en que se notifique al ofendido la ejecutoria que le impone tal pena al acusado.

"Con plenitud de jurisdicción, resolver conforme a derecho el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público."

B. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión 177/2019, sostuvo literalmente lo siguiente:

"QUINTO.—En el caso se procede el estudio de los agravios de la revisión, bajo el principio de estricto derecho, ello dado que es el vicefiscal jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado y el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Ejecución de Sanciones Penales quienes acuden a interponer el presente recurso de revisión con el carácter de parte tercero interesada en el juicio de amparo, de manera que no se encuentra en alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 79 de la Ley de Amparo.

"Expuesto lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que son fundados los agravios expresados por las autoridades recurrentes, por las consideraciones que enseguida se expondrán.

"Como antecedentes del asunto se tiene que en su calidad de sentenciado ***** presentó demanda de amparo contra la resolución de once de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación *****.

"En esa determinación se revocó la diversa emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, mediante la cual había declarado procedente el incidente no especificado sobre prescripción del pago de la reparación del daño a la cual había sido condenado el quejoso en el proceso que se le instruyó por el delito de homicidio calificado.

"Del asunto conoció el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado, el cual mediante auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, aceptó el conocimiento del asunto, lo admitió a trámite y ordenó su registro bajo el número 170/2019.

"Seguido el trámite correspondiente, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia correspondiente el veinte de junio siguiente, concediendo al quejoso para efectos el amparo y protección de la Justicia Federal, al considerar que la responsable analizó los agravios de la fiscalía recurrente bajo la premisa inexacta de que la reparación del daño no es una sanción.

"Decisión adoptada por el a quo que sustentó fundamentalmente en las consideraciones siguientes:

"1. Estimó fundados los conceptos de violación, al considerar la resolución reclamada violatoria de garantías en perjuicio del quejoso.

"2. Destacó las consideraciones emitidas por la Sala responsable para declarar fundados los agravios expresados por el representante social, y revocar la resolución recurrida, entre ellas:

"i) Que no resultaba aplicable el artículo 136(2) del Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León, pues el legislador local ubicó la reparación del daño como una consecuencia jurídica de responsabilidad por la comisión de un delito (artículo 45 Bis del código punitivo en cita) y no como una sanción penal (artículo 46 del mismo ordenamiento legal).

"ii) El plazo de dos años para que opere la prescripción, estatuido en el citado artículo 136, únicamente resulta aplicable cuando se trata de la sanción consistente en multa o de las sanciones no sujetas a término, no así al resto de las consecuencias jurídicas derivadas de la comisión de delitos.

"iii) Aun y cuando la reparación del daño ha sido considerada como pena pública, en tanto cumple una función social exigible de oficio por el Ministerio Público, no por ello debe otorgársele el carácter de sanción penal.

"iv) Que ni el Código Penal del Estado, ni el Código de Procedimientos Penales del Estado, contienen un precepto que señale cuál es el plazo que debe transcurrir para que prescriba el derecho a la reparación del daño derivado de un delito, y que por ello debía acudir al Código de Procedimientos Civiles del Estado.

"3. Así, el Juez de Distrito afirmó que la responsable partió de una premisa inexacta, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la reparación del daño en materia penal es una sanción pecuniaria y, por tanto, estimó constituye una 'pena' o 'sanción pública' impuesta al gobernado mediante una sentencia, de ahí que la Sala responsable debió respetar tal carácter y aplicar el plazo de dos años para el cómputo de la prescripción de la reparación del daño.

"4. En consecuencia, concedió el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y procediera a analizar nuevamente los agravios formulados, considerando que para la prescripción de la reparación del daño se debe atender a las reglas del Código Penal del Estado (sic) de Nuevo León conforme a lo establecido en la propia sentencia de amparo.

"Para combatir los anteriores argumentos, los recurrentes adujeron como agravio, entre otros, el siguiente:

"En su primer agravio señalaron las autoridades recurrentes, que contrario a lo expuesto por el Juez de Distrito, la resolución reclamada en el juicio de amparo sí se encontraba debidamente fundada y motivada y no partió de una premisa inexacta, pues afirmó, la responsable basó su determinación en el hecho de que no resultaba aplicable a la institución jurídica de la reparación del daño el término de prescripción señalado en el artículo 136 del Código Penal del Estado, toda vez que la reparación del daño no fue considerada como sanción ni como pena por el legislador estatal.

"Lo que dijeron puede observarse en el título octavo del libro primero del Código Penal del Estado de Nuevo León, donde específicamente en el artículo 46 no se establece como sanción a la reparación del daño, sino que ésta está incluida en el diverso 145 Bis, como una consecuencia jurídica de responsabilidad derivada de la comisión de delito.

"Tales conceptos (sanción y consecuencia jurídica de responsabilidad) mencionaron las recurrentes, no deben ser confundidos ni entendidos como sinónimos, pues la fijación de las sanciones penales atiende al grado de culpabilidad del sujeto activo, mientras la cuantía de la reparación del daño se determina por la entidad de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta delictiva.

"Además indicaron, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atribuyó a la reparación del daño el carácter de pena pública, al interpretar el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), para asegurar la protección de los derechos fundamentales de la víctima u ofendido del delito.

"Sin embargo, ello no implicaba que debía otorgársele el carácter de sanción penal cuando la ley no lo establece como tal, pues en el caso, dicha circunstancia no eliminaba su finalidad primordial que es resarcir a las víctimas u ofendidos de un delito de las afectaciones a sus bienes jurídicos, al ser una consecuencia jurídica de responsabilidad.

"Abundaron al respecto al señalar que el numeral 148 del Código Penal de la entidad dispone que las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, no se extienden a las responsabilidades a que se refiere el capítulo único del título octavo correspondiente, en el que se encuentra la reparación del daño como responsabilidad pecuniaria derivada del delito.

"Como se adelantó, el anterior agravio sintetizado resulta fundado.

"Para así calificarlo es menester previamente señalar que en la resolución reclamada la Sala responsable determinó revocar la decisión que había decretado procedente el incidente de prescripción de la condena al pago de la reparación del daño, bajo el argumento de que el término de dos años señalado en el artículo 136 del Código Penal del Estado, para que opere la prescripción de las sanciones, no es aplicable a la reparación del daño.

"Así lo consideró, pues la legislación penal del Estado no le otorga a dicha institución el carácter de sanción, sino de consecuencia jurídica de responsabilidad; por tanto, afirmó era necesario acudir a la legislación adjetiva civil del Estado para determinar el plazo de prescripción de la condena a la reparación del daño.

"Por su parte en la resolución recurrida, como quedó de manifiesto en párrafos anteriores, el argumento toral del Juez de Distrito para otorgar la protección constitucional al quejoso, fue que contrario a lo expuesto por la responsable, la reparación del daño sí tiene el carácter de sanción penal, independientemente de que el Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León, no la incluya expresamente como tal.

"Como puede verse la litis del asunto versó respecto a si la condena a la reparación del daño impuesta por la comisión de un delito constituye una sanción penal y, como consecuencia, si para determinar sobre su prescripción le son aplicables las reglas del Código Penal, o bien, de la legislación procesal civil, ambas del Estado de Nuevo León.

"Al efecto, es preciso destacar como hecho notorio, que sobre el tema que nos ocupa este Tribunal Colegiado ya se ha pronunciado y ha determinado que aunque la reparación del daño cumple una función de sanción, no se trata de una pena igual a las establecidas por el código punitivo aplicable, tales como la sanción corporal o la multa, pues conserva su naturaleza eminentemente civil.

"Consecuentemente se concluyó que la prescripción establecida en los artículos 136 y 148 del Código Penal del Estado no es aplicable para la reparación del daño, siéndolo la ley que regula su extinción, el Código de Procedimientos Civiles del (sic) Estado de Nuevo León.

"En ese orden de ideas, son incorrectas las consideraciones del juzgador de amparo en la sentencia recurrida, y para ello se traen a colación los argumentos sustentados por este órgano colegiado en

las resoluciones que se mencionan al margen(3) en las que se estableció:

"Que la naturaleza de la reparación del daño en materia penal, ha sido desarrollada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha definido una postura sobre el tema, en la tesis CCXVI/20169 (sic), de rubro y texto siguientes: «REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. SU NATURALEZA JURÍDICA CONFORME AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. La reparación del daño en materia penal es una sanción pecuniaria que el juzgador debe imponer al individualizar la pena al sujeto activo del delito, de conformidad con el artículo 30 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé el catálogo de penas, entre las que se encuentran las sanciones pecuniarias. A su vez, de los numerales 37, 42 a 45 y 47 del código citado, se advierte que entre las sanciones pecuniarias se ubica la reparación del daño, así como su naturaleza jurídica y la forma en que el Juez de proceso debe fijarla al individualizar la pena. Así, la reparación del daño en materia penal constituye una <pena> o <sanción pública> impuesta al gobernado o imputado mediante una sentencia y, por ende, al incluirse dicha figura dentro del derecho penal, su determinación y cuantificación deben regirse por los principios de integralidad, efectividad y proporcionalidad aplicables a la materia. En efecto, la reparación del daño en la vía penal tiene una comprensión dual pues, por un lado, satisface una función social, en su carácter de pena y, por otro, satisface una función privada, al contribuir a resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido del delito, con motivo de su comisión, lo que trae, a su vez, para el agente del delito, una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo que, por imperativo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, necesariamente debe dar lugar a una reparación del daño en el proceso penal. Lo anterior, independientemente de si la víctima u ofendido decide ejercer una acción particular, en virtud de que ambas reparaciones (aun con un mismo origen) son autónomas y pueden subsistir una y otra, pues la responsabilidad civil (objetiva y subjetiva) nacida de la comisión de un ilícito penal no cesa porque dicha conducta se haya sancionado mediante la aplicación del derecho punitivo, antes bien, subsiste con sujeción a las reglas del derecho civil, ya que aun cuando ambas pudieron tener el mismo origen, su naturaleza es distinta.».

"Conforme a su análisis, ha clarificado que la reparación del daño en la vía penal tiene una función dual, ya que por un lado, cumple con una función social, en su carácter de pena y, por otro, satisface una función privada, al reconocer una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo a cargo del delincuente en relación con la víctima.

"Además, se precisó que este último punto es importante, ya que siguiendo la línea discursiva del intérprete constitucional, a pesar de que la reparación del daño implica una pena o sanción, ello no elimina su finalidad primordial, ya que en su génesis la reparación del daño, se trata de una institución de naturaleza civil, la cual tiene un punto de contacto con la materia penal, en la circunstancia de que el hecho que la genera, también constituye un delito.

"Ello conforme a la tesis CXIX/20161 (sic) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente:

"«REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. SU NATURALEZA CIVIL. Existe una postura casi unánime sobre la naturaleza civil de la reparación del daño derivada de la comisión de un delito prevista en los códigos penales, de acuerdo con la cual, su fundamento sería el mismo que el de la responsabilidad aquiliana. Ahora bien, la reparación del daño en materia penal satisface tanto una función social, en su carácter de pena o sanción pública, como una privada, en la medida en que también contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva. En ese sentido, la reparación del daño implica una sanción pública o una pena, al cumplir una función social que es exigible de oficio por el Ministerio Público; sin embargo, ello no elimina su finalidad primordial, consistente en resarcir a las víctimas u ofendidos de un delito de las afectaciones a sus

bienes jurídicos. Así, la denominada responsabilidad civil ex delicto constituye una parte de la responsabilidad civil extra contractual, la cual se caracteriza porque el hecho ilícito que la genera es también constitutivo de delito.'

"Es bajo ese contexto, que aunque la reparación del daño cumple una función de sanción, ello no involucra que se trate de una pena igual a las establecidas por el código punitivo sustantivo aplicable, tal y como lo sostuvo la responsable, tales como la sanción corporal o la multa, ya que conserva su naturaleza eminentemente civil, por lo que no le son aplicables ciertas reglas del derecho penal, mientras que su interpretación puede partir de las normas relativas a la normativa civil, conforme al criterio 1a. CXXII/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro (sic) y texto siguientes:

"**REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DEL DELITO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU NATURALEZA CIVIL.** A pesar del carácter de sanción pública que tiene la reparación del daño en materia penal, es importante no caracterizarla como una pena, esencialmente porque no le son aplicables los principios del derecho penal, como son el principio de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad. Ello lleva a deslindar la imposición de las penas corporales de la cuantificación de la reparación y a que el Juez resuelva atendiendo a la naturaleza civil de los daños. Así, mientras que la fijación de la pena debe realizarse atendiendo al grado de culpabilidad del sujeto, la cuantía de la reparación, por el contrario, debe venir determinada por la entidad del daño. Otra consecuencia relevante que deriva de la naturaleza civil de la reparación del daño, es que la misma debe ser justa e integral, dado que estos principios constitucionales aplican a la figura con independencia del código o legislación en la que se encuentre regulada. Asimismo, en tanto su naturaleza es eminentemente civil, puede acudir a la legislación en la materia para interpretar el contenido y alcance de dicha reparación.'

"Es así que, la razón por la que la reparación del daño se contiene en el derecho punitivo, no es porque se trate de una institución penal, tal como lo explicó el intérprete constitucional en el amparo directo en revisión 4646/2014, donde refirió que dicha circunstancia acontecía a merced de que el legislador pretendía evitarle a la víctima la necesidad de instaurar un juicio civil por daños, por lo que instituía a su favor la vía penal, a fin de reparar de manera simultánea a la sentencia, los daños y perjuicios que se hubieren generado con el hecho delictuoso, sin que ello implique que su naturaleza deje de ser civil.

"Desde esa perspectiva es que se puede acudir a la normativa civil a fin de definir el alcance de la reparación del daño dentro de un juicio penal, lo cual tiene lógica, pues incluso, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no se reparan los daños conforme a los parámetros establecidos en materia civil, se puede acudir a esta vía a reclamarla, tal como se ve en la jurisprudencia 43/201413 (sic), que establece:

"**RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO.** Una vez que en un proceso penal se ha condenado a la reparación del daño, por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso civil desvinculado del proceso penal la responsabilidad objetiva del propio inculcado o de un tercero, toda vez que en ambos casos la responsabilidad civil que se reclama en ese segundo proceso es con motivo de la misma acción y el mismo daño. En este sentido, debe señalarse que la responsabilidad civil subjetiva derivada de un delito no tiene una «naturaleza distinta» a la responsabilidad civil objetiva. No obstante, en el supuesto antes señalado, excepcionalmente podrá acudir a la vía civil cuando pueda apreciarse claramente que la legislación civil permite una mayor amplitud indemnizatoria en comparación con la legislación penal, de tal manera que la acción de reparación de daño en la vía civil pueda dar lugar a un mayor beneficio económico como resultado de una regulación más favorable para la

víctima de la cuantificación del daño. Desde luego, dicha excepción no implica que en este supuesto el ofendido pueda hacer exigible la reparación del daño en la vía civil de manera completamente autónoma. La cantidad que eventualmente se conceda por concepto de reparación del daño en el proceso civil deberá descontar la indemnización que se haya cubierto con motivo de la condena decretada en el proceso penal.' (énfasis añadido).

"Además, se precisó que en armonía con la teoría trazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede afirmar que el Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León, sigue esa línea discursiva, esto es, reconoce la verdadera naturaleza de la reparación del daño como consecuencia civil de un ilícito penal.

"Es así, que dicho principio se trata de una piedra angular en el tema, que irradia la interpretación del resto de las normas de esa legislación, por lo que toda interpretación de este ordenamiento tratándose de la reparación del daño, debe partir como punto de referencia, de que se debe buscar aquella hermenéutica que reconozca su naturaleza civil.

"En ese sentido, se estableció que el artículo 136 del Código Penal para el Estado, que establece la prescripción de las sanciones que no tengan temporalidad, no es aplicable al caso de la reparación del daño, como figura de naturaleza civil.

"Lo anterior, se dijo, es acorde con el artículo 148 de la misma normatividad, el cual al establecer que la extinción prevista en este título no afecta a las responsabilidades, esto es la reparación de daños y perjuicios, hace referencia a que las causas que extinguen tanto la pretensión punitiva como la potestad ejecutiva, en su conjunto, no son aplicables a la reparación del daño, más aún, porque al encontrarse en el capítulo único, se trata de un parámetro aplicable a todo el título.

"Para justificar la conclusión apuntada, se realizó una interpretación sistemática de los artículos que han sido expuestos, y se llegó a la conclusión de que la prescripción establecida en el Código Penal del Estado, en los artículos 136 y 148, no es aplicable para la reparación del daño, mientras que la ley que regula su extinción se trata del código civil adjetivo estatal.

"Con base en las anteriores consideraciones, es dable afirmar que en el caso, tal y como lo afirmaron las autoridades recurrentes, el Magistrado responsable no partió de una premisa inexacta al emitir la resolución reclamada donde revocó la resolución de primer grado y declaró improcedente el incidente de prescripción de reparación del daño.

"Lo anterior se obtiene del análisis de la sentencia que constituye el acto reclamado, donde se observa que la Sala responsable de manera fundada y motivada adujo que en razón a que los códigos sustantivo y adjetivo penales del Estado no presentan un dispositivo que señale cuál es el plazo que deberá transcurrir para que prescriba el derecho a la reparación del daño derivado de un delito, devenía admisible y necesario acudir a la legislación civil.

"Determinación a la que arribó al establecer que el Código Penal del Estado estatuye en su artículo 136 que las sanciones no sujetas a término prescriben en dos años; sin embargo, dicha disposición no resultaba aplicable tratándose de la reparación del daño, pues el legislador local ubicó a este concepto en una categoría distinta a la de las sanciones, esto es, como consecuencia jurídica de responsabilidad, que si bien son figuras equiparadas, su regulación, conceptualización y naturaleza son distintas.

"Argumentos los anteriores que, con base en lo expuesto, no resultan inexactos, contrario a ello fue correcta la determinación adoptada por el tribunal de alzada al distinguir entre sanción, entendida ésta como la pena impuesta por la comisión de un delito y, la reparación del daño, como

consecuencia jurídica para resarcir al sujeto pasivo del daño sufrido, por lo cual de manera acertada reconoció a esta última su naturaleza eminentemente civil.

"En ese orden de ideas, es claro que resultan fundados los agravios aducidos, por lo que procede revocar la sentencia impugnada y, en términos de la fracción VI del artículo 93 de la Ley de Amparo, enseguida se estudiarán los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en su demanda de amparo."

C. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión 153/2019, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO.—Son infundados los agravios formulados por el quejoso recurrente así como por su defensora pública federal, ***** comisionada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, como se indica en la presente resolución.

"El quejoso ***** , así como su defensora pública federal ***** , comisionada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, interpusieron sus respectivos recursos de revisión en contra de la resolución constitucional de cinco de junio de dos mil diecinueve emitida en el amparo indirecto 567/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, en la cual, por una parte se sobreseyó en el juicio por lo que hizo al acto reclamado al Juez de Ejecución de Sanciones Penales; y negó el amparo al quejoso respecto al acto consistente en la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho emitida en el toca de apelación en artículo (sic) ***** del índice del Magistrado de la Décima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio de la cual confirmó la de primer grado emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales el veintiséis de junio de dos mil dieciocho en la carpeta de ejecución ***** que declaró improcedente la controversia sobre prescripción de la reparación del daño.

"Ahora bien, debe señalarse que es correcto y, por tanto, debe subsistir el citado sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito del conocimiento, puesto que al rendir tal autoridad su informe con justificación, ésta no manifestó que realizara actos de ejecución y tampoco que el quejoso hubiera señalado expresamente qué actuación realizó la Juez de Ejecución de Sanciones Penales en cumplimiento a lo determinado por la autoridad responsable ordenadora.

"En consecuencia, y como la parte quejosa, aquí recurrente, no desvirtuó lo anterior con elemento de prueba alguno, lo que procedía era, como acertadamente lo determinó el a quo, sobreseer en el juicio de garantías respectivo, en relación a tal acto reclamado, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo.

"Además de que la procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.

"Tienen aplicación al caso las jurisprudencias 814 visible a fojas quinientos cincuenta y tres, Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1995; 940 consultable en la página mil quinientos treinta y ocho, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988; y en la tesis visible en la hoja treinta y cinco, del Volumen XCIII del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que respectivamente señalan:

"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las

partes, cualquiera que sea la instancia.'

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.'

"IMPROCEDENCIA, ES DE ORDEN PÚBLICO. La improcedencia en los juicios de amparo en revisión es una cuestión de orden público que puede examinarse de oficio.'

"Por otro lado, el Juez de Distrito determinó negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal por cuanto hizo a la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho emitida en el toca de apelación en artículo (sic) ***** del índice del Magistrado de la Décima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio de la cual confirmó la de primer grado emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales el veintiséis de junio de dos mil dieciocho en la carpeta de ejecución ***** que declaró improcedente la controversia sobre prescripción de la reparación del daño. Para ello basó su decisión esencialmente en que:

"- La Jueza Ejecutora de Sanciones Penales en el Estado, con sede en esta ciudad, al momento de emitir la determinación materia de la resolución de apelación que constituye el acto reclamado, consideró que el artículo 45 Bis del código represivo estatal, señala que son consecuencias jurídicas de responsabilidad por la comisión del delito: I. Sanciones; II. Medidas de seguridad; y, III. Reparación del daño y perjuicio; que luego, indicó que el numeral 46 de la referida legislación, establece cuáles son las sanciones, sin que mencionara expresamente la reparación del daño; y precisó la juzgadora de trato, que la defensora pública del aquí quejoso no estaba en lo correcto al pretender que se aplicara a su defendido el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que dice: 'la multa prescribe en dos años; en igual forma prescriben las sanciones no sujetas a término. Las demás sanciones prescriben por el transcurso de un periodo igual al que debían durar y una cuarta parte más, pero nunca excederán de sesenta años'; ello, pues afirmó que la reparación del daño no es una sanción, sino una consecuencia jurídica del delito, y por ende, no le era aplicable el numeral en comento.

"- Que tal autoridad de primer grado igualmente expuso que la reparación del daño, es un derecho humano de las víctimas a que las consecuencias del delito les sean reparadas; luego, indicó que el dispositivo legal 148 de la legislación sustantiva aplicable establece: 'La prescripción de la responsabilidad a la que se refiere este capítulo no corre sino hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada. Las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, no se extienden a las responsabilidades a que se refiere este capítulo.' Precizando que el capítulo a que se refiere ese numeral es el relativo a la reparación del daño; y apuntó que para determinar cuándo prescribe el derecho a la reparación del daño debía acudir al artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles, que dice: 'La acción para pedir la ejecución de una sentencia, laudo, convenio judicial o extrajudicial resultado de los mecanismos alternativos para la solución de controversias o transacción judicial prescribirá a los diez años, contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado.'

"- De manera que, la acción para pedir la reparación del daño prescribe en diez años; señaló que el plazo respectivo empezó a correr el trece de noviembre de dos mil quince, en que se notificó a la parte ofendida la sentencia de condena, por ende, no había prescrito el pago de la reparación del daño.

"- Y que en sus agravios esgrimidos contra la resolución del Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, la defensora pública expresó que la reparación del daño era una sanción no sujeta a término; que ha transcurrido el término establecido en el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León para que proceda la prescripción de la sanción al pago de la reparación

del daño, dado que la parte ofendida fue notificada de la sentencia que condenó a su defendido, desde el trece de noviembre de dos mil quince; que se aplicó incorrectamente contra su defendido el artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, cuando era un procedimiento meramente penal. Que en caso de que la parte ofendida pretendiera hacer efectiva la reparación del daño, lo podría hacer mediante un juicio civil, considerando aplicable la tesis de rubro: 'REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).'

"Mientras que en la resolución de apelación que se interpuso en contra de tal resolución, y que constituye propiamente el acto reclamado, el Magistrado responsable determinó confirmar la misma, considerando que los agravios formulados por la parte recurrente eran infundados e inoperantes; estos últimos porque la recurrente no argumentó en relación con las consideraciones de la Jueza de primer grado en cuanto a que el Código Penal para el Estado de Nuevo León, no podía aplicarse en el caso concreto, pues a su parecer, ese concepto (reparación del daño), no se consideraba como una sanción aplicable por la comisión de un delito al no estar contemplada por el artículo 46 del código represivo en comento y que se trataba de una consecuencia jurídica de responsabilidad penal de acuerdo con el diverso 45 Bis, fracción III, de ese ordenamiento; concluyendo que para decretar la prescripción de la condena en la reparación del daño, debería estarse a lo dispuesto por el artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, que establece un término de diez años para que aquélla opere.

"- Por lo que la responsable refirió que la defensora del quejoso debió argumentar contra esas consideraciones y, por ende, sus agravios eran inoperantes.

"- También consideró infundado que la defensa considerara aplicable la jurisprudencia, de rubro: 'REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).'

, pues refirió que tal criterio contenía lineamientos para determinar a partir de qué momento empezaba a contar el término para la prescripción de la sanción relativa a la reparación del daño, tema que consideró diverso al que analizó. Y concluyó que al no advertir transgresión a los derechos fundamentales de la parte reo, se confirmaba la determinación apelada.

"- Así, en la resolución constitucional recurrida, se estimó que lo resuelto por el Magistrado responsable, no resultó transgresor de derechos sustantivos del quejoso.

"- Y para mayor abundamiento, se indicó que la resolución combatida no afectaba derechos fundamentales del quejoso, dado que la reparación del daño, ha sido elevada a la categoría de derecho fundamental, así se desprende del texto del artículo 20 constitucional que en su parte conducente, dice: 'De los derechos de la víctima o del ofendido: Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.'

"- Que nuestro Máximo Tribunal interpretó que la víctima tiene a su favor ese derecho sustantivo, el que quedó incorporado a raíz de la reforma al artículo 1o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011; señalando que las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para lo cual se consideró necesario incorporar a la Ley Fundamental los derechos humanos previstos en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Así, a partir de la entrada en vigor de la citada reforma constitucional, el derecho a una reparación integral o justa indemnización ante la vulneración de derechos fundamentales, previsto en el artículo 63 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, puede considerarse incorporado al ordenamiento jurídico mexicano.

"- Consideraciones que forman parte de la tesis 1a. CXCIV/2012 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro: 2001744, consultable en la página 522 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Tomo 1, septiembre de 2012, materia constitucional, de rubro: 'REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.'

"- Que igualmente, nuestro máximo intérprete constitucional indicó que ese derecho no debe restringirse innecesariamente; entendiendo que lo que se pretende es anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento adecuado, ello con base en la tesis 1a./J. 31/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro: 2014098, consultable en la página 752 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Tomo I, abril de 2017, materias constitucional y penal, de rubro (sic): 'DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE.'

"- Que la reparación del daño es un derecho fundamental; y en la vía penal tiene una función dual, ya que por un lado, cumple con una función social en su carácter de pena y, por otro, satisface una función privada, al reconocer una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo a cargo del delincuente en relación con la víctima; así, la reparación del daño, si bien implica una pena o sanción, no elimina su finalidad primordial, ya que en su génesis, la reparación del daño, es una institución de naturaleza civil, la cual tiene un punto de contacto con la materia penal, en la circunstancia de que el hecho que la genera, también constituye un delito; ello conforme a la tesis CXIX/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1141 del Libro 29, Tomo II, abril de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2011482, de rubro (sic): 'REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. SU NATURALEZA CIVIL.'

"- Y que bajo ese contexto, aunque la reparación del daño cumple una función de sanción, ello no involucra que se trate de una pena igual a las establecidas por el código punitivo sustantivo aplicable, tales como la sanción corporal o la multa, ya que conserva su naturaleza eminentemente civil, por lo que no le son aplicables ciertas reglas del derecho penal, mientras que su interpretación puede partir de las normas relativas a la normativa civil, conforme al criterio contenido en la tesis 1a. CXXII/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1142, del Libro 29, Tomo II, abril de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2011483, de rubro (sic): 'REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DEL DELITO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU NATURALEZA CIVIL.'

"- Y que en ese orden de ideas, el Código Penal para el Estado de Nuevo León reconocía la verdadera naturaleza de la reparación del daño como consecuencia civil de un ilícito penal, al establecer en su artículo 45 Bis, que una consecuencia jurídica de responsabilidad por la comisión del delito es, la reparación del daño, la que ya se dijo sí es una pena pública, pero a la que no le son aplicables ciertas reglas de la legislación penal; por lo que el artículo 136 del Código Penal para el Estado, que establece la prescripción de las sanciones que no tengan temporalidad, no es aplicable

al caso de la reparación del daño, por así disponerlo la propia legislación penal.

"- Que al efecto, el artículo 148 del mismo cuerpo normativo, establece que las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, no se extienden a las responsabilidades a que se refiere ese capítulo, el cual se titula: 'RESPONSABILIDAD PECUNIARIA DERIVADA DEL DELITO.', lo que quiere decir, que las causas que extinguen tanto la pretensión punitiva como la potestad ejecutiva, en su conjunto, no son aplicables a la reparación del daño; por lo que se podía inferir que la prescripción de la acción penal y de la sanción no afectan la reparación del daño, situación que tiene lógica, en razón a que el hecho acontecido que fue considerado como delito y por el que fue sentenciada una persona pudo ocasionar daños a la parte ofendida que resintió la acción, los que deben ser reparados, situación reconocida y elevada a la categoría de derecho fundamental.

"- Y de esta manera, en caso de que las reglas establecidas en la legislación sustantiva penal permitan determinar que ha operado la extinción de la acción penal y de la sanción, ello no significa que el daño ocasionado ha desaparecido, de tal suerte, que no puede esfumarse el derecho humano a una reparación integral del daño ocasionado por el injusto, pues la naturaleza de la reparación del daño es de carácter civil.

"- En tales condiciones, si el artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles, dice: 'La acción para pedir la ejecución de una sentencia, laudo, convenio judicial o extrajudicial resultado de los mecanismos alternativos para la solución de controversias, o transacción judicial prescribirá a los diez años, contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado.'—Entonces, si la reparación del daño deriva de una sentencia en la que fue condenado el quejoso a otorgarla, era claro que conforme a lo dispuesto en el numeral en cita prescribirá en diez años la acción para pedir su ejecución.

"En tal orden de ideas, al no advertirse transgresión a los derechos humanos del aquí quejoso se procedió a negarle al quejoso el amparo que solicitó contra la citada resolución reclamada.

"En contra de lo anterior el quejoso *****, así como su defensora pública federal *****, comisionada al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado, interpusieron sus respectivos recursos de revisión, en los cuales expresaron los agravios ya transcritos, los cuales se analizarán conjuntamente, puesto que esencialmente combaten con sus argumentos que:

"- Sí opera la prescripción de la sanción pecuniaria relativa al pago de la reparación del daño impuesta al suscrito mediante la ejecutoria de fecha 4 cuatro de mayo de 2015 dos mil quince por el Magistrado de la hoy extinta Décimo Segunda Sala Unitaria Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, quien dictó sentencia condenatoria en el toca de apelación en definitiva *****, derivado del proceso penal *****, seguido en contra del aquí quejoso por el delito de fraude, donde se impuso también una pena privativa de libertad de 5 cinco años de prisión, multa de 50 cincuenta cuotas equivalente a \$2,267.50 dos mil doscientos sesenta y siete pesos con cincuenta centavos M.N., y pago a la reparación del daño por la cantidad de \$10'614,512.00 diez millones seiscientos catorce mil quinientos doce pesos M.N. en favor de la persona moral denominada *****.

"- Que dicha resolución fue notificada al apoderado legal de la persona moral *****, el trece de noviembre de dos mil quince; por lo que a la fecha del planteamiento de la controversia relativa a la prescripción de la reparación del daño ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado (doce de marzo de dos mil dieciocho) y adhesión al mismo por parte de su defensa (seis de abril de dos mil dieciocho, y de la audiencia en la que se resolvería la controversia ante la autoridad de ejecución (trece de junio de dos mil dieciocho) ya habían transcurrido más de dos años de notificada la parte que tenía derecho a reclamar el pago de la reparación del daño; y que la víctima

tiene derecho a una reparación del daño integral; sin embargo, tal prerrogativa en su favor tiene fecha de preclusión y éste es el plazo de dos años, conforme lo dispone la ley de la materia (penal), mismo que aprecia en exceso transcurrido, de conformidad con lo preceptuado por el numeral 136 del Código Penal del Estado.

"- La autoridad responsable se centró en el argumento referente a que la condena de reparación del daño prescribe en el término de diez años, conforme al artículo 479 de la ley adjetiva civil; pero pasó por alto que el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el principio pro-persona, el cual exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es Parte, de forma que favorezcan ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del citado criterio hermenéutico, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia y que, ante la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios.

"- Que el tema de la prescripción de la reparación del daño debe ser regido por los arábigos 122, 123, 136 y 148, 46 Bis y 46 del Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León.

"- Además que considera desacertada la interpretación que se proporcionó al concepto de reparación del daño (lo cual se aprecia en el contenido de la sentencia recurrida); ya que, contrario a lo señalado por la autoridad federal de Distrito, aunque el artículo 46 del multicitado Código Penal del Estado no incluya la reparación del daño como una sanción; dicho concepto tiene el carácter conocido de pena pública y general para todos los delitos, lo que se traduce en una sanción pecuniaria, al consistir en la obligación expuesta al delincuente de restablecer y resarcir los perjuicios derivados del delito por el que fue condenado.

"- Que el Juez Federal estuvo en el error al compartir la opinión del tribunal de alzada en el apartado en el que apreció que, para determinar el plazo de la prescripción de la acción para ejecutar una sentencia de condena al pago de reparación del daño la autoridad de ejecución atendió al mandamiento civil, en su ordenamiento procesal, específicamente a lo dispuesto en el artículo 479 que estipula el plazo de diez años para que prescriba el derecho a ejecutar o ejercer una acción derivado de lo resuelto en una sentencia; a lo que el recurrente señala que se opone dado que insiste en que la reparación del daño se encuentra catalogada como una consecuencia jurídica acorde al numeral 45 Bis del código punitivo estatal, lo que no puede significar que deje de ser una pena.

"- En el concepto de reparación del daño no son aplicables los numerales de la legislación de la materia civil, toda vez que éstos se refieren a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos o contrarios a las buenas costumbres, que producen algún daño, pero no a los que derivan de un delito.

"- Que en la en la (sic) actualidad el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito Judicial se ha pronunciado (amparo indirecto en revisión 27/2019, derivado del juicio de amparo indirecto 615/2018 del que conoció el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León), en el sentido de que al analizar la materia de la prescripción ésta debe ceñirse a lo dispuesto por los artículos 136 y 148 del Código Penal del (sic) Estado de Nuevo León y no conforme a la legislación civil.

"Así, los agravios expuestos por los recurrentes, en los que en síntesis señalan que la reparación del daño en el caso estaba prescrita, que el plazo para ello es de dos años, y que no se puede remitir a la ley adjetiva civil para ello, son infundados.

"Lo anterior es así porque, como acertadamente se indicó en la resolución constitucional recurrida, y a su vez se avaló en el acto reclamado, la condena a la reparación del daño establecida en la legislación penal local no es imprescriptible pero le son aplicables las reglas de la prescripción que dispone la legislación civil, a partir de las cuales se debe realizar el cómputo respectivo.

"Ahora bien, en sus agravios, los recurrentes consideran que el derecho a reclamar la reparación del daño, era computable en términos de lo establecido en los artículos 136 y 148 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que dicen lo siguiente:

"Artículo 136. La multa prescribe en dos años; en igual forma prescriben las sanciones no sujetas a término. Las demás sanciones prescriben por el transcurso de un periodo igual al que debían durar y una cuarta parte más, pero nunca excederán de sesenta años.'

"Artículo 148. La prescripción de la responsabilidad a la que se refiere este capítulo no corre sino hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada.

"Las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, no se extienden a las responsabilidades a que se refiere este capítulo.'

"Esto es, que la parte ofendida puede pedir en el lapso de dos años la ejecución de la sentencia, ya que por cuanto a la condena por dicho concepto, no existe un término especial y debe remitirse al señalado para la prescripción de la sanción por multa, conforme al artículo citado en primer término.

"Destacó además, que deberá tomarse como punto de partida para el cómputo correspondiente, la fecha de la notificación a la parte afectada de la sentencia ejecutoria que condenó por tal concepto al quejoso, esto es, el trece de noviembre de dos mil quince, que fue cuando se le notificó a la parte ofendida la sentencia de apelación de cuatro de mayo de dos mil quince en el toca penal *****.

"Ahora bien, contrario a lo expuesto por los recurrentes, y como de manera acertada se indicó en la resolución constitucional recurrida, la naturaleza de la reparación del daño establecida en materia penal, ha sido desarrollada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha definido una postura sobre el tema, en la tesis CCXVI/2016, publicada en la página 512 del Libro 34, Tomo I, septiembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia constitucional, Décima Época, registro: 2012445, que dice lo siguiente:

"REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. SU NATURALEZA JURÍDICA CONFORME AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. La reparación del daño en materia penal es una sanción pecuniaria que el juzgador debe imponer al individualizar la pena al sujeto activo del delito, de conformidad con el artículo 30 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé el catálogo de penas, entre las que se encuentran las sanciones pecuniarias. A su vez, de los numerales 37, 42 a 45 y 47 del código citado, se advierte que entre las sanciones pecuniarias se ubica la reparación del daño, así como su naturaleza jurídica y la forma en que el Juez de proceso debe fijarla al individualizar la pena. Así, la reparación del daño en materia penal constituye una «pena» o «sanción pública» impuesta al gobernado o imputado mediante una sentencia y, por ende, al incluirse dicha figura dentro del derecho penal, su determinación y cuantificación deben regirse por los principios de integralidad, efectividad y proporcionalidad aplicables a la materia. En efecto, la reparación del daño en la vía penal tiene una comprensión dual pues, por un lado, satisface una función social, en su carácter de pena y, por otro, satisface una función privada, al contribuir a resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido del delito, con motivo de su comisión, lo que trae, a su vez, para el agente del delito, una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo que, por imperativo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, necesariamente debe dar lugar a una reparación del daño en el proceso penal. Lo anterior, independientemente de si la víctima u ofendido decide ejercer una acción particular, en virtud de que ambas reparaciones (aun con un mismo origen) son autónomas y pueden subsistir una y otra, pues la responsabilidad civil (objetiva y subjetiva) nacida de la comisión de un ilícito penal no cesa porque dicha conducta se haya sancionado mediante la aplicación del derecho punitivo, antes bien, subsiste con sujeción a las reglas del derecho civil, ya que aun cuando ambas pudieron tener el mismo origen, su naturaleza es distinta.’

“Conforme a su análisis, ha clarificado que la reparación del daño en la vía penal tiene una función dual, ya que por un lado, cumple con una función social, en su carácter de pena y, por otro, satisface una función privada, al reconocer una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo a cargo del delincuente en relación con la víctima.

“Este último punto es importante, ya que siguiendo la línea discursiva del intérprete constitucional, a pesar de que la reparación del daño implica una pena o sanción, ello no elimina su finalidad primordial, ya que en su génesis la reparación del daño, se trata de una institución de naturaleza civil, la cual tiene un punto de contacto con la materia penal, en la circunstancia de que el hecho que la genera, también constituye un delito.

“Ello conforme a la tesis CXIX/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1141 del Libro 29, Tomo II, abril de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2011482, que dice lo siguiente:

“REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. SU NATURALEZA CIVIL. Existe una postura casi unánime sobre la naturaleza civil de la reparación del daño derivada de la comisión de un delito prevista en los códigos penales, de acuerdo con la cual, su fundamento sería el mismo que el de la responsabilidad aquiliana. Ahora bien, la reparación del daño en materia penal satisface tanto una función social, en su carácter de pena o sanción pública, como una privada, en la medida en que también contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva. En ese sentido, la reparación del daño implica una sanción pública o una pena, al cumplir una función social que es exigible de oficio por el Ministerio Público; sin embargo, ello no elimina su finalidad primordial, consistente en resarcir a las víctimas u ofendidos de un delito de las afectaciones a sus bienes jurídicos. Así, la denominada responsabilidad civil ex delicto constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual, la cual se caracteriza porque el hecho ilícito que la genera es también constitutivo de delito.’

“Es bajo ese contexto, que aunque la reparación del daño cumple una función de sanción, ello no involucra que se trate de una pena igual a las establecidas por el código punitivo sustantivo aplicable, tales como la sanción corporal o la multa, ya que conserva su naturaleza eminentemente civil, por lo que no le son aplicables ciertas reglas del derecho penal, mientras que su interpretación puede partir de las normas relativas a la normativa civil, conforme al criterio CXXII/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1142, del Libro 29, Tomo II, abril de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2011483, que dice lo siguiente:

“REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DEL DELITO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU NATURALEZA CIVIL. A pesar del carácter de sanción pública que tiene la reparación del daño en materia penal, es importante no caracterizarla como una pena, esencialmente porque no le son aplicables los principios del derecho penal, como son el principio de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad. Ello lleva a deslindar la imposición de las penas corporales de la cuantificación de la reparación y a que el Juez resuelva atendiendo a la naturaleza civil de los daños. Así, mientras que la fijación de la pena debe realizarse atendiendo al

grado de culpabilidad del sujeto, la cuantía de la reparación, por el contrario, debe venir determinada por la entidad del daño. Otra consecuencia relevante que deriva de la naturaleza civil de la reparación del daño, es que la misma debe ser justa e integral, dado que estos principios constitucionales aplican a la figura con independencia del código o legislación en la que se encuentre regulada. Asimismo, en tanto su naturaleza es eminentemente civil, puede acudir a la legislación en la materia para interpretar el contenido y alcance de dicha reparación.'

"Es así que, la razón por la que la reparación del daño se contiene en el derecho punitivo, no es porque se trate de una institución penal, tal como lo explicó el intérprete constitucional en el amparo directo en revisión 4646/2014, donde refirió que dicha circunstancia acontecía a merced de que el legislador pretendía evitarle a la víctima la necesidad de instaurar un juicio civil por daños, por lo que instituía a su favor la vía penal, a fin de reparar de manera simultánea a la sentencia, los daños y perjuicios que se hubieren generado con el hecho delictuoso, sin que ello implique que su naturaleza deje de ser civil.

"Desde esa perspectiva es que contrario a lo aseverado por los recurrentes en sus agravios, sí se puede acudir a la normativa civil a fin de definir el alcance de la reparación del daño dentro de un juicio penal,(4) lo cual tiene lógica, pues incluso, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no se reparan los daños conforme a los parámetros establecidos en materia civil, se puede acudir a esta vía a reclamarla, tal como se ve en la jurisprudencia 43/2014 de la Primera Sala, sustentada durante la Décima Época Judicial, registro: 2007292, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 478, que dice lo siguiente:

"RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO. Una vez que en un proceso penal se ha condenado a la reparación del daño, por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso civil desvinculado del proceso penal la responsabilidad objetiva del propio inculpado o de un tercero, toda vez que en ambos casos la responsabilidad civil que se reclama en ese segundo proceso es con motivo de la misma acción y el mismo daño. En este sentido, debe señalarse que la responsabilidad civil subjetiva derivada de un delito no tiene una «naturaleza distinta» a la responsabilidad civil objetiva. No obstante, en el supuesto antes señalado, excepcionalmente podrá acudir a la vía civil cuando pueda apreciarse claramente que la legislación civil permite una mayor amplitud indemnizatoria en comparación con la legislación penal, de tal manera que la acción de reparación de daño en la vía civil pueda dar lugar a un mayor beneficio económico como resultado de una regulación más favorable para la víctima de la cuantificación del daño. Desde luego, dicha excepción no implica que en este supuesto el ofendido pueda hacer exigible la reparación del daño en la vía civil de manera completamente autónoma. La cantidad que eventualmente se conceda por concepto de reparación del daño en el proceso civil deberá descontar la indemnización que se haya cubierto con motivo de la condena decretada en el proceso penal.'

"Ahora bien, en armonía con la teoría trazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede afirmar que el Código Penal para el Estado, sigue esa línea discursiva, esto es reconoce la verdadera naturaleza de la reparación del daño como consecuencia civil de un ilícito penal.

"Es así, que dicho principio se trata de una piedra angular en el tema que irradia la interpretación del resto de las normas de esa legislación, por lo que toda interpretación de este ordenamiento tratándose de la reparación del daño, debe partir como punto de referencia, de que se debe buscar aquella hermenéutica que reconozca su naturaleza civil.

"Por lo anterior, se puede afirmar que el artículo 136 del Código Penal para el Estado, que

establece la prescripción de las sanciones que no tengan temporalidad, no es aplicable al caso de la reparación del daño, como figura de naturaleza civil. Por lo que los agravios de los recurrentes en este sentido son infundados.

"Precisamente, ello es acorde con el artículo 148 de la misma normatividad, el cual al establecer que la extinción prevista en ese título no afecta a las responsabilidades, esto es la reparación de daños y perjuicios, hace referencia a que las causas que extinguen tanto la pretensión punitiva como la potestad ejecutiva, en su conjunto, no son aplicables a la reparación del daño, más aún, porque al encontrarse en el capítulo único, se trata de un parámetro aplicable a todo el título.

"Por ende, de la interpretación sistemática de los artículos que han sido expuestos, se llega a la conclusión de que la prescripción establecida en el Código Penal para el Estado, en los artículos 136 y 148, no es aplicable para la reparación del daño, mientras que la ley que regula su extinción se trata del Código Civil para el Estado, el cual, como bien se indicó en la resolución constitucional recurrida, y fue avalado por la de apelación responsable al confirmar la de primera instancia, para determinar cuándo prescribe el derecho a la reparación del daño debía acudir al artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles, que dice:

"La acción para pedir la ejecución de una sentencia, laudo, convenio judicial o extrajudicial resultado de los mecanismos alternativos para la solución de controversias o transacción judicial prescribirá a los diez años, contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado."

"De manera que, efectivamente, la acción para pedir la reparación del daño prescribe en diez años; y de acuerdo a lo expuesto en la audiencia respectiva, como lo expuso la Jueza de ejecución y así lo señaló también la propia defensora del quejoso, el plazo respectivo empezó a correr el trece de noviembre de dos mil quince, en que se notificó a la parte ofendida la sentencia de condena.

"En esa medida es evidente que no ha prescrito el pago de la reparación del daño, ya que no han transcurrido los diez años que la ley aplicable exige para ello, como se indicó previamente.

"A lo anterior ilustran las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4646/2014, en sesión de catorce de octubre de dos mil quince, que dicen lo siguiente:

"II. Naturaleza de la reparación de los daños derivados de los hechos delictivos, reclamable en el proceso penal.

"Se ha discutido ampliamente en la doctrina sobre la naturaleza civil o penal de la reparación derivada de los delitos prevista en los códigos penales. Sin embargo, actualmente existe una postura casi unánime sobre su naturaleza civil. Se dice que el deber de reparar los daños derivados del delito tiene una naturaleza estrictamente civil, de hecho su fundamento sería el mismo que el de la responsabilidad aquiliana, y el único motivo por el que queda contenida en los códigos penales es una razón histórica o práctica.

"El Tribunal Superior de España ha sostenido una postura similar, al considerar que aun cuando la reparación del daño se encuentra regulada en el Código Penal no pierde su naturaleza civil. En efecto, desde la resolución dictada en la sentencia 349/2009, la Sala Penal de dicho tribunal ha sostenido que 'la acción civil ex delicto no pierde su naturaleza civil por el hecho de ejercitarse en proceso penal'. En este sentido, dicho tribunal ha llegado a afirmar la existencia de una doctrina general, conforme a la cual el régimen de la reparación de los daños derivados del delito debe atender a los principios del derecho civil, siempre que no exista un especial precepto de naturaleza

penal que limite o modifique su régimen.

"En el sistema mexicano, esta Primera Sala en la Novena Época, emitió diversos precedentes en los que caracterizó a la reparación del daño de las víctimas del delito como una pena pública. En la contradicción de tesis 102/2000-PS, se dijo por ejemplo, que una de las notas distintivas de la reparación del daño prevista en el Código Penal para el Distrito Federal entonces vigente era que dicha 'sanción pecuniaria adquiere el carácter de pena pública cuando se le impone al sentenciado y el de sanción civil cuando se trata de un tercero que conforme a la legislación penal también pudiera estar obligado a cubrirla.'

"Recientemente; sin embargo, en la resolución de la contradicción de tesis 227/2013, esta Primera Sala determinó que dicha "caracterización es incorrecta, en razón de que el hecho de que la reparación del daño se reclame a través del ejercicio de la acción penal no excluye o elimina el carácter civil de la misma.

"La reparación del daño en materia penal satisface tanto una función social, en su carácter de pena o sanción pública, como una función privada, en la medida en que también contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva. En efecto, puede decirse que la reparación del daño implica una sanción pública o una pena, en el sentido de que cumple una función social que se hace exigible de oficio por el Ministerio Público. Sin embargo, lo anterior no elimina el fin primordial de la reparación del daño, consistente en resarcir a las víctimas u ofendidos de un delito de las afectaciones a sus bienes jurídicos.

"Incluso en materia civil, esta Sala ha establecido el carácter social de la reparación de los daños al incorporar los denominados 'daños punitivos'. Considerando que debe ponderarse el grado de responsabilidad de quien cometió el daño con el objeto de establecer un reproche social hacia el ilícito, si esa punición no es dada, el reconocimiento de tal desaprobación prácticamente desaparece. Por tanto, la caracterización de la reparación económica de los daños como sanción social, no es propia del ámbito penal. 'El resarcimiento del daño contribuye de manera notable a los fines penales de prevención general y especial, y de ahí que se postule un acercamiento del derecho civil y del derecho penal.'

"La valoración de los daños y su correlativa reparación tienen una naturaleza propia, independiente a los códigos o legislaciones en que se encuentren regulados, penales, administrativas o civiles. En efecto, la naturaleza de una norma no puede hacerse depender del cuerpo legal en que se halle encuadrada sino de la esfera jurídica en que produce sus efectos.

"Así, la denominada responsabilidad civil ex delito constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual y se caracteriza porque el acto ilícito que la genera es constitutivo de delito. En tal sentido, para para (sic) determinar si es procedente la reparación, tienen que acreditarse los mismos elementos de la responsabilidad, no obstante el código que la regule, a saber: a) el hecho ilícito; b) el daño; y, c) el nexo causal entre el hecho y el daño. Cada una de las legislaciones puede establecer diferencias de carácter procesal, o requisitos distintos para probar dichos elementos, así como formas de indemnización especiales.

"Así, la reparación de los daños derivados de un delito puede ser reclamada en diversas vías: (i) en la vía administrativa cuando el responsable sea el Estado; (ii) en la vía civil, tratándose de responsabilidad extracontractual derivada de un delito;(5) y, (iii) en la vía penal, por solicitud del Ministerio Público dentro de la misma causa penal.

"En nuestro sistema penal, particularmente en el caso del Distrito Federal, al prever la reparación de los daños en la vía penal, el legislador pretendió evitarle a la víctima la necesidad de instaurar un

juicio civil por daños. Así, optó por reparar de manera simultánea a la sentencia penal, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado con el hecho delictuoso.

"El carácter disociado entre el establecimiento de las penas y las reparaciones económicas de los daños también pueden observarse a lo largo del Código Penal del Distrito Federal. Esta circunstancia se advierte, por ejemplo, de las normas relativas a la pena innecesaria (artículo 75); a la extinción de la pena (artículo 96); y el indulto (artículo 103). En todos estos casos, el legislador ha previsto la posibilidad de que el juzgador pueda prescindir de la imposición de la pena de prisión así como que la potestad para imponer las penas o medidas de seguridad se extinga. No obstante, la legislación penal expresamente prohíbe que a través de esas determinaciones se afecte a la reparación del daño.

"Las justificaciones anteriores llevan a concluir que a pesar de que la reparación de los daños derivados del delito se encuentre en el Código Penal del Distrito Federal, ello se debió a que el legislador pretendió ahorrarle tiempo y recursos a la víctima, al evitarle el promover un juicio civil. Lo anterior, sin embargo, no cambia la naturaleza de la reparación, ni prescinde que ésta sea justa e integral, a efecto de que se subsanen debidamente las afectaciones a las víctimas.

"Ahora bien, ¿qué consecuencias derivan de la naturaleza civil de la reparación del daño en la vía penal?

"A pesar del carácter de sanción pública que tiene la reparación del daño, es importante no caracterizarla como una pena, esencialmente porque no le son aplicables los principios del derecho penal, como son el principio de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad. Ello lleva a deslindar la imposición de las penas corporales de la cuantificación de la reparación y a que el Juez resuelva atendiendo a la naturaleza civil de los daños.

"Es importante precisar que aun cuando esta Primera Sala ha comenzado a abordar el tema de la naturaleza de la reparación del daño recientemente, ya desde el amparo directo en revisión 55/2006 se había señalado que la reparación del daño se encuentra prevista en el Código Penal como una 'sanción autónoma a las penas del delito'. Circunstancia que hace patente que 'se cumple con la garantía de exacta aplicación de la ley penal, sin que para ello dicha sanción, necesariamente, requiera estar descrita en el artículo que prevea el delito en cuestión, ante la eventualidad de su imposición.'

"De dicho precedente pueden derivarse dos importantes consecuencias: (i) No es necesario que la reparación esté regulada en los términos estrictos que exige la materia penal, exacta aplicación de la ley, taxatividad, etcétera; y, (ii) que el monto de la indemnización es independiente a la pena corporal o al grado de responsabilidad que se establezca. Como se explicará, en la determinación de la reparación deben valorarse otros aspectos, además del grado de responsabilidad.

"Al encontrar su fundamento en la responsabilidad penal en la culpabilidad del sujeto, la medición de la pena debe realizarse atendiendo a la medida de la culpabilidad; la cuantía de la reparación, por el contrario debe venir determinada por la entidad del daño.

"Otra de las consecuencias relevantes de la naturaleza de la reparación de los daños, es que ésta debe ser justa e integral, dado que dichos principios aplican a la figura independientemente del código o legislación en que se encuentre regulada. Asimismo, en tanto que su carácter es civil, puede acudir a la legislación civil para interpretar el alcance de la figura.

"Incluso, al resolver la contradicción de tesis 227/2013 esta Primera Sala señaló que una vez que en un proceso penal se ha condenado a la reparación del daño, por regla general no se puede

demandar posteriormente en un proceso civil la reparación de ese mismo daño. No obstante, se consideró que cuando no se haya reparado a la víctima de manera suficiente, ésta podría acudir a la vía civil para reclamar la indemnización faltante. De dicho asunto derivó la jurisprudencia de rubro: 'RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO.'

"Sin que este Tribunal Colegiado tenga obligación legal de adoptar los criterios emitidos al respecto del tema por su homólogo de este Circuito; a más de que al respecto este órgano jurisdiccional se ha pronunciado sobre el tema en las ejecutorias emitidas al resolver los amparos en revisión 127/2018, 289/2018 y 1/2019, en donde se ha pronunciado en el sentido de que la condena a la reparación del daño establecida en la legislación penal local no es imprescriptible, pero le son aplicables las reglas de la prescripción que dispone la legislación civil, a partir de las cuales debe realizar el cómputo respectivo, como se indicó a la vez en la resolución constitucional recurrida, y se avaló por la autoridad responsable en la sentencia que constituye el acto reclamado, que confirmó la de primer grado en la que se realizó el cómputo prescriptivo con base en el ordenamiento civil para Nuevo León.

"Por lo que, resultan infundados los agravios expuestos por los recurrentes, en los que alegaron cuestiones relativas al momento en que prescribía la reparación del daño, tomando como base para ello el término de dos años que contempla el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León; cuestiones que resultan infundadas, dado que resulta fútil realizar el cómputo indicado por tales recurrentes, puesto que como se indicó en párrafos precedentes, la figura de la prescripción de la reparación del daño no debe computarse de conformidad con ese dispositivo legal, sino el de diez años previsto en el artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

"Y en tal medida, el citado arábigo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que establece la prescripción de las sanciones que no tengan temporalidad, no es aplicable al caso de la reparación del daño, como figura de naturaleza civil. Ello de conformidad con el numeral 148 del mismo ordenamiento penal, el cual al establecer que la extinción prevista en este título no afecta a las responsabilidades, esto es, la reparación de daños y perjuicios hace referencia a que las causas que extinguen tanto la pretensión punitiva como la potestad ejecutiva, en su conjunto, no son aplicables a la reparación del daño, más aún, porque al encontrarse en el capítulo único, se trata de un parámetro aplicable a todo el título.

"Y de la interpretación sistemática de los artículos expuestos, se concluye que la prescripción establecida en el Código Penal para el Estado, en los artículos 136 y 148, no es aplicable para la reparación del daño.

"Razones expuestas por este Tribunal Colegiado para considerar sustancialmente infundados los agravios del recurrente, por lo que procede confirmar la resolución constitucional y sobreseer por una parte y negar por otra el amparo al quejoso."

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Para que exista una contradicción de tesis es preciso que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico y respecto del cual se hayan sustentado consideraciones divergentes; y, finalmente, que ello pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de la forma de resolver la cuestión jurídica que estuvo sometida a consideración de dichos órganos jurisdiccionales para determinar una solución

unificada.

Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, con número de registro digital: 164120, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)

Conforme a lo anterior, este Pleno del Cuarto Circuito considera que se actualiza una contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, pues resolvieron cuestiones litigiosas en las que ejercieron su arbitrio judicial y efectuaron interpretaciones de manera diversa cada uno en relación con una misma cuestión o problemática jurídica, dando lugar a formas distintas de resolver los asuntos sujetos a su conocimiento.

Pues, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en el recurso de revisión 27/2019, sostuvo, en esencia, que la reparación del daño tiene naturaleza de sanción, en términos del artículo 46, inciso L, en relación con los diversos 136 y 148, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, por lo que el cómputo para su prescripción debe analizarse bajo el contexto que prevé la citada codificación en sus numerales 136, 138 y 148.

En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en los recursos de revisión 177/2019 y 153/2019 consideró, medularmente, que la prescripción establecida en los artículos 136 y 148 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, no le era aplicable a la reparación del daño, dada su naturaleza civil, siendo la ley que regula su extinción, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.

Luego, es evidente que hay una contradicción entre los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

QUINTO.—Estudio de la contradicción de tesis. Este Pleno del Cuarto Circuito estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se define, coincidente, en esencia, con el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, conforme a las consideraciones siguientes:

En principio, cabe destacar que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, coinciden en que la resolución reclamada en vía de amparo, fue emitida por un Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, precisamente en la etapa de ejecución de sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, en la que el eje central del tema se enfoca a determinar la procedencia o no de la prescripción de la condena a la reparación del daño.

La discrepancia de criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito se presenta, en la medida en que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito considera, esencialmente:

- El artículo 45 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León señala como consecuencias jurídicas de responsabilidad por la comisión del delito, a la reparación del daño y perjuicio. Mientras que el artículo 46 del mismo código, no señala expresamente a la reparación del daño como sanción, pero se ubica en el inciso L) de dicho precepto, en relación con los artículos 142 y 143 del mismo ordenamiento punitivo.
- Que la reparación del daño en materia penal es constitutiva de una pena o sanción pública,

impuesta al gobernado mediante sentencia, de tal suerte que, al incluirse dentro del derecho penal, su determinación y cuantificación deben regirse por los principios de integralidad, efectividad y proporcionalidad aplicables a la materia (penal).

- La reparación del daño comparte con la multa como sanción, en su carácter de afectación pecuniaria, aquélla tiene un carácter autónomo.
- La reparación del daño tiene contenido económico-restaurativo, mas no privativo de libertad, se trata de una sanción no sujeta a término, pero sí supeditada a prescribir en dos años conforme al artículo 136, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Nuevo León.

Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo, medularmente, que:

- Aunque la reparación del daño en materia penal cumple una función de sanción, no se trata de una pena igual a las establecidas en el código punitivo a la sanción corporal o multa, conserva su naturaleza eminentemente civil, por ello, no le son aplicables ciertas reglas del derecho penal, en su interpretación puede partir de normas relativas al derecho civil.
- La razón por la que la reparación del daño se contiene en el derecho punitivo, no es porque se trate de una institución penal, se pretende evitarle a la víctima la necesidad de instaurar un juicio civil por daños, a fin de que simultáneamente a la sentencia penal se reparen los daños y perjuicios generados por el hecho delictivo, pero sin que su naturaleza deje de ser civil.
- Así, la prescripción establecida en los artículos 136 y 148 del Código Penal para el Estado de Nuevo León no son aplicables para la reparación del daño, debe acudir al Código de Procedimientos Civiles para dicha entidad federativa, concretamente, al artículo 479, para determinar que la acción para pedir la reparación del daño prescribe en diez años.

Expuestas las discrepancias de criterio, se procede a dilucidar las mismas, para lo cual, como preámbulo se trae a colación el origen de la reparación del daño en sede constitucional.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 1917 y hasta el 2000, no existía noción de "reparación del daño", sino que su regulación se realizó en la legislación secundaria.

Cambió la situación paulatinamente con cuatro reformas constitucionales:

1. La de 21 de septiembre de 2000 que introdujo en el texto del artículo 20 constitucional, un apartado B, en el que se estableció un elenco mínimo de derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de delitos, uno de los cuales fue la facultad de solicitar una reparación del daño.
2. La de 14 de junio de 2002 que reformó el artículo 113 constitucional para adicionarle un segundo párrafo (que actualmente se encuentra en la parte final del artículo 109), para establecer que la responsabilidad del Estado por su actividad administrativa irregular es objetiva y directa, y da lugar al pago de una indemnización a favor de la persona que haya resentido el daño.
3. La de 18 de junio de 2008 en materia procesal penal que trasladó el catálogo de derechos de las víctimas y ofendidos al apartado C del artículo 20 constitucional, e incorporó en su fracción VII, el derecho a impugnar determinaciones del Ministerio Público que afecten la obtención de la reparación del daño.
4. La de 29 de julio de 2010 que introdujo en la Constitución Federal el fundamento de las acciones

colectivas, dejando a la legislación secundaria la regulación de los mecanismos de reparación del daño.

Lo destacado de estas reformas estriba en que, la legislación secundaria desarrolló el contenido de las reparaciones o de la indemnización bajo una base eminentemente civil y con un contenido apoyado principalmente en la teoría de las obligaciones.

La anterior situación cambió con la reforma constitucional en esta materia, publicada el 10 de junio de 2011, la cual incluyó en el tercer párrafo de su artículo 1o. un catálogo de las obligaciones genéricas y los deberes específicos del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, dentro de los cuales se reconoció la "reparación por violaciones a derechos humanos de manera integral o justa indemnización".

En ese sentido, se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCXXXVII/2018 (10a.), con número de registro digital: 2018805, de título y subtítulo: "REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. ORIGEN DE SU INCORPORACIÓN AL TEXTO CONSTITUCIONAL EN LA REFORMA DE 10 DE JUNIO DE 2011."(7)

Entonces, es viable establecer que, de origen, las legislaciones secundarias en materia penal avalando lo establecido en sede constitucional, acogieron la reparación del daño bajo una base eminentemente civil.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 102/2000-PS, de la que emergió la jurisprudencia 1a./J. 88/2001,(8) con número de registro digital: 188109, refirió como nota distintiva, que la reparación del daño prevista en el artículo 30 del Código Penal para el Distrito Federal, era una sanción pecuniaria que adquiere el carácter de pena pública cuando se le impone al sentenciado y, el de sanción civil cuando se trata de un tercero que conforme a la legislación penal también pudiera estar obligado a cubrirla.

También, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa contradicción de tesis 227/2013, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 43/2014 (10a.),(9) con número de registro digital: 2007292, recapitulando lo anteriormente ponderado, consideró que es incorrecta la caracterización que había fijado en aquella contradicción de tesis, pues el hecho de que la reparación del daño se reclame del ejercicio de la acción penal no excluye o elimina el carácter civil de la misma.

Posteriormente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4646/2014,(10) en sesión de catorce de octubre de dos mil quince, retomó el tema relativo a la naturaleza de la reparación de los daños derivada de los hechos delictivos, reclamable en el proceso penal, subrayando al respecto.

El deber de reparar los daños derivados del delito tiene una naturaleza estrictamente civil, su fundamento sería el mismo que el de la responsabilidad aquiliana, el único motivo por el que queda contenida en los códigos penales es una razón histórica o práctica.

Señaló el Alto Tribunal, que la reparación del daño implica una sanción pública o una pena, en tanto cumple una función social que se hace exigible de oficio por el Ministerio Público. No elimina el fin primordial de la reparación del daño, consistente en resarcir a las víctimas u ofendidos de un delito de las afectaciones a sus bienes jurídicos.

Enfatizó, el resarcimiento del daño contribuye de manera notable a los fines penales de prevención

general y especial, y de ahí que se postule un acercamiento del Derecho Civil y del Derecho Penal.

Se sostuvo, la denominada responsabilidad civil ex delito constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual y se caracteriza porque el acto ilícito que la genera es constitutivo de delito.

Así, concluyó el Alto Tribunal que, a pesar de que la reparación de los daños derivados del delito se encuentre en el Código Penal del (sic) Distrito Federal, ello se debió a que el legislador pretendió ahorrarle tiempo y recursos a la víctima, al evitarle promover un juicio civil. Empero, no cambia la naturaleza de la reparación, ni prescinde que ésta sea justa e integral, a efecto de que se subsanen debidamente las afectaciones a las víctimas.

Y, de que no obstante el carácter de sanción pública que tiene la reparación del daño, es importante no caracterizarla como una pena, porque no le son aplicables los principios del derecho penal, como son el principio de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad y, por ello, el artículo 46 del Código Penal para el Estado de Nuevo León,⁽¹¹⁾ no ubica en sus distintas fracciones que lo componen, al concepto de reparación del daño como "sanción", sino que el diverso artículo 45 Bis, fracción III,⁽¹²⁾ del propio código punitivo, cataloga a la reparación del daño como consecuencia jurídicas de responsabilidad por la comisión del delito, como se consideró por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2384/2013, resuelto el siete de febrero de dos mil catorce, que en lo conducente estableció:

"133. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima pertinente establecer que existe una diferencia jurídica trascendental entre la sanción penal de multa y la condena por reparación del daño. Con independencia de que la multa se considere por naturaleza una sanción penal de carácter pecuniario, para imponerse requiere que esté prevista con tal carácter como consecuencia jurídica de la norma penal infringida. En cambio, la reparación del daño, es una consecuencia jurídica que se impone como sanción derivada de la comisión de un delito penal y la demostración de responsabilidad del sentenciado, por la generación de afectación a terceros y que debe resarcirse. En este contexto, si bien comparte el carácter de afectación pecuniaria, su origen es diverso: la multa es una sanción establecida en la norma penal y la reparación del daño depende de la existencia de factores que demuestren que la conducta ilícita haya generado una afectación que deba ser resarcida."

"134. Las diferencias particularizadas tienen relevancia para establecer su aplicación y consecuencias. Al margen de que la legislación penal la comprenda como una sanción penal, como acontecen con el Código Penal Federal que prevé como género la sanción pecuniaria y como especies la multa y la reparación del daño; a diferencia de la legislación estatal analizada –Código Penal para el Estado de Nuevo León– que únicamente prevé como sanción penal la multa, en tanto que la reparación del daño sólo como una consecuencia jurídica del delito que deriva de la declaratoria de responsabilidad penal. Debe tenerse presente que tienen objetivos de política criminal diferentes."

Lo cierto es que, acorde a los parámetros fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios con antelación citados, la reparación del daño sí constituye una sanción pública en tanto cumple una función social exigible oficiosamente por el Ministerio Público, quien, en términos del artículo 141 del Código Penal para el Estado de Nuevo León,⁽¹³⁾ se encuentra obligado a solicitar la condena por dicho concepto y el Juez de la causa a resolver lo conducente, una vez determinada la responsabilidad penal de una persona de un hecho delictivo, el sujeto habrá de responder también por el daño y perjuicio causado por el ilícito.

Ello, al margen de que el artículo 46 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, no reconozca o contemple la reparación del daño como sanción pública y, con independencia de que el citado

precepto esté comprendido en el capítulo I, título cuarto, de dicho ordenamiento legal, referido al rubro de penas, pues, el hecho de ubicar a la reparación del daño como sanción pública, acorde a lo ya expuesto, per se no cabe reputarlo como pena dado que no participa ni le son aplicables los principios del derecho penal, relativos al principio de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad, como lo explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios ultra citados y, ulteriormente lo reflejo así en la tesis 1a. la/2016 (10a.) (sic), con número de registro digital: 2011483, de título y subtítulo: "REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DEL DELITO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU NATURALEZA CIVIL."(14)

Por esas mismas razones, a propósito de los principios de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad, tampoco cabe sostener que la reparación del daño comparta con la multa la figura de sanción asimilada, porque, la diferencia radica en que la multa sí participa directamente de esos principios, mientras la reparación del daño no.

La multa consiste en pagar al Estado la suma pecuniaria que se fije en la sentencia, según lo dispone el artículo 50 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.(15)

Por lo general, la multa a imponer va en función al delito perpetrado por el sujeto activo, es el flagelo según se trate el que contempla el margen mínimo y máximo en el que habrá de fijarse la multa.

Incluso, para la fijación del monto de la multa, el juzgador deberá tomar en cuenta la capacidad económica del sentenciado y, en caso de que no pudiera pagar la multa que le fuera impuesta como sanción, el juzgador fijará en sustitución de la misma, jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, que no podrán exceder de noventa (artículo 50).

Por esas propias razones, cuando se está frente al concepto de reparación del daño en su calidad de sanción pública, aun cuando el Código Penal para el Estado de Nuevo León no regula acerca de su prescripción como sí lo hace con las sanciones privativas de libertad o que no lo son;(16) la multa, sanciones no sujetas a término y demás sanciones;(17) de obligaciones económicas(18) y, de responsabilidad,(19) no por ello, debe ubicarse en el segundo supuesto del artículo 136 del citado código, de sanciones no sujetas a término y que prescriben en dos años, igual que la multa.

Lo que así se determina porque la sanción publica que adquiere la reparación del daño, su regulación no va en función a las normas de derecho penal.

En efecto, quedo visto que, de origen, las legislaciones secundarias en materia penal avalando lo establecido en sede constitucional, acogieron la reparación del daño bajo una base eminentemente civil.

Congruente con ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 227/2013 determinó que el hecho de que la reparación del daño se reclame a través del ejercicio de la acción penal, no excluye o elimina el carácter civil de la misma.

Misma postura que adoptó el propio Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 4646/2014, en donde señaló que el deber de reparar los daños derivados del delito tiene una naturaleza estrictamente civil, su fundamento sería el mismo que el de la responsabilidad aquiliana, el único motivo por el que queda contenida en los códigos penales es una razón histórica o práctica (aludiendo aquí al origen).

Para denotar todavía más que la condena a la reparación del daño en un juicio penal no es una pena o sanción, se debe tomar en cuenta la adición del artículo 45 Bis del Código Penal de esta entidad federativa, mediante decreto publicado el veintiocho de abril de dos mil cuatro en el

Periódico Oficial del Estado, de cuyo texto se infiere que por voluntad del legislador, en el encabezado del señalado precepto se estableció como género las consecuencias jurídicas de responsabilidad por la comisión del delito; y, en las tres fracciones las especies, esto es, sanciones; medidas de seguridad; y, reparación del daño y perjuicio.

De ese modo, es inexacto afirmar que la figura en estudio sea una sanción encuadrable en el inciso L) del artículo 46 del preinvocado código punitivo, sino lo correcto es ubicarla en la fracción I del numeral 45 Bis, en relación con el diverso 141, ambos de la misma legislación sustantiva. Incluso, este último precepto le otorga el rango de orden público respecto de los sentenciados mediante cosa juzgada.

Entonces, con base en esas directrices, no hay duda acerca de que la reparación del daño aun cuando revista el carácter de orden público, impuesto en un proceso penal, no pierde el carácter eminentemente civil.

De ahí que, para determinar lo conducente en relación a la prescripción de la reparación del daño dentro de un proceso penal del fuero común, no es dable recurrir a la regla del artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que establece la prescripción en dos años respecto a sanciones no sujetas a término.

Lo anterior es así, porque el propio código punitivo del Estado en su artículo 148, segundo párrafo, excluye esa posibilidad, dado que refiere el numeral, que las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, no se extienden a la responsabilidades a que se refiere el capítulo único, título octavo, referente a la reparación del daño y perjuicio como consecuencia de responsabilidad pecuniaria derivada del delito.

De ello deriva, que las causas que extinguen tanto la pretensión punitiva como la potestad ejecutiva, en su conjunto, no son aplicables a la reparación del daño. Significa pues, que la prescripción de la acción penal y de la sanción, no afectan la reparación del daño y, ello, lógicamente es así en tanto que el hecho acontecido que fue considerado como delito y por el que fue sentenciado una persona, pudo haber ocasionado daños a la parte ofendida que resintió la acción, y éstos deben ser reparados acorde al reconocimiento y categoría elevada a derecho fundamental por el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ende, ante la falta de regulación en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, en lo atinente a la prescripción de la reparación del daño, debe acudir al origen del derecho civil de la que surge, en el caso particular, al artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles de la propia entidad federativa,⁽²⁰⁾ que prevé un término de diez años para que prescriba la acción para pedir la ejecución de una sentencia.

Conforme a las anteriores consideraciones, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos de los artículos 216, párrafo segundo, y 225 de la Ley de Amparo, es el siguiente:

El concepto de reparación de daño en un proceso penal, aun cuando el artículo 46 del Código Penal para el Estado de Nuevo León no la contempla como sanción, sino que el diverso 45 Bis del mismo ordenamiento punitivo la prevé como una consecuencia jurídica de responsabilidad por la comisión de un delito, sí constituye una sanción pública, ya que cumple una función social donde el Ministerio Público se encuentra obligado a solicitar la condena respectiva y el Juez de la causa a resolver lo conducente. Empero, la reparación del daño, como sanción pública, no reviste la calidad de pena ni comparte con la multa una sanción asimilada, en razón de que a estas dos figuras les son aplicables los principios de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad, de los que no

participa la reparación del daño. Además, la naturaleza de la reparación del daño es eminentemente civil, incorporada al código punitivo por razón histórica o práctica, para ahorrar tiempo y recursos a la víctima, al evitarle el promover un juicio civil. Lo anterior da pauta para establecer que la reparación del daño como sanción pública que es, no está sujeta al término de la prescripción de dos años a que alude el artículo 136 del Código Penal para el Estado, atinente a sanciones no sujetas a término, porque dicha codificación no regula expresa y específicamente el aspecto concreto, sino que tal supuesto lo excluye el artículo 148 del código punitivo del Estado en su segundo párrafo, al referir que "las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, no se extienden a las responsabilidades a que se refiere este capítulo", por lo que debe acudir al origen del derecho civil del que surge, concretamente al artículo 479 del Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad federativa, que prevé un término de diez años para que prescriba la acción para pedir la ejecución de una sentencia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO.—Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno del Cuarto Circuito, en términos del último considerando de esta resolución.

Notifíquese; remítase en el plazo establecido por el artículo 219 de la Ley de Amparo, la tesis de que se trata a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para efectos de su publicación.

Así lo resolvió el Pleno del Cuarto Circuito, por mayoría de tres votos de los Magistrados José Roberto Cantú Treviño, Felisa Díaz Ordaz Vera y Jesús María Flores Cárdenas, contra el voto del Magistrado José Heriberto Pérez García, siendo ponente el primero de los nombrados, ante el secretario de Acuerdos Plenario licenciado Carlos Hugo de León Rodríguez, que autoriza y da fe.

En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, hago constar y certifico que en esta versión pública se suprimió la información clasificada como confidencial o reservada.

Nota: Las tesis aisladas y de jurisprudencia 1a. CCCXXXVII/2018 (10a.), 1a. CXXII/2016 (10a.), 1a. CXXIII/2016 (10a.) y 1a./J. 43/2014 (10a.) citadas en esta ejecutoria, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas, del viernes 22 de abril de 2016 a las 10:22 horas y del viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas, respectivamente.

1. Consultable a página treinta y seis, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

2. "Artículo 136. La multa prescribe en dos años; en igual forma prescriben las sanciones no sujetas a término. Las demás sanciones prescriben por el transcurso de un periodo igual al que debían

durar y una cuarta parte más, pero nunca excederán de sesenta años."

3. Criterio sustentado al resolver los amparos en revisión 127/2018, 289/2018 y 1/2019, votados por unanimidad en sesiones celebradas el dieciséis de enero, nueve de mayo y treinta de mayo de dos mil diecinueve, respectivamente.

4. Tesis 1a. CXXIII/2016 (10a.), sostenida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en la Décima Época, registro: 2011488, contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 1146, que refiere:

"REPARACIÓN DEL DAÑO EN MATERIA PENAL. PARA DETERMINAR SU ALCANCE, EL JUZGADOR PUEDE ACUDIR A LA LEGISLACIÓN CIVIL O A LA DOCTRINA DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La reparación del daño tiene una misma naturaleza, independientemente del código en que se encuentre regulada. Así, con la finalidad de lograr una justa indemnización, el órgano jurisdiccional que esté conociendo de la reparación del daño en la vía penal, puede acudir a la legislación civil, o incluso a la doctrina de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de responsabilidad civil, siempre que no exista una regla especial en la legislación penal. Dicha remisión sólo resulta admisible -e incluso podría considerarse necesaria- para entender los principios que rigen la reparación de los daños, o bien, cuando no existan en la legislación penal parámetros suficientes con base en los cuales pueda determinarse la existencia del daño o su debida indemnización."

5. Código Civil para el Distrito Federal. "Artículo 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima."

6. Texto: "De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe

salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Con número de registro digital: 164120. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7).

7. Texto: "En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde su promulgación en 1917 y hasta el 2000, no existía noción de 'reparación del daño', sino que su regulación se realizó en la legislación secundaria. Esta situación cambió paulatinamente con las siguientes cuatro reformas constitucionales: (1) la de 21 de septiembre de 2000 que introdujo en el texto del artículo 20 constitucional, un apartado B, en el que se estableció un elenco mínimo de derechos de las víctimas u ofendidos por la comisión de delitos, uno de los cuales fue la facultad de solicitar una reparación del daño; (2) la de 14 de junio de 2002 que reformó el artículo 113 constitucional para adicionarle un segundo párrafo (que actualmente se encuentra en la parte final del artículo 109), para establecer que la responsabilidad del Estado por su actividad administrativa irregular es objetiva y directa, y da lugar al pago de una indemnización a favor de la persona que haya resentido el daño; (3) la de 18 de junio de 2008 en materia procesal penal que trasladó el catálogo de derechos de las víctimas y ofendidos al apartado C del artículo 20 constitucional, e incorporó en su fracción VII, el derecho a impugnar determinaciones del Ministerio Público que afecten la obtención de la reparación del daño; y (4) la de 29 de julio de 2010 que introdujo en la Constitución Federal el fundamento de las acciones colectivas, dejando a la legislación secundaria la regulación de los mecanismos de reparación del daño. Ante estas reformas, la legislación secundaria desarrolló el contenido de las reparaciones o de la indemnización bajo una base eminentemente civil y con un contenido apoyado principalmente en la teoría de las obligaciones. Esta situación cambió con la reforma constitucional en esta materia, publicada el 10 de junio de 2011, la cual incluyó en el tercer párrafo de su artículo 1o. un catálogo de las obligaciones genéricas y los deberes específicos del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, dentro de los cuales se reconoció la 'reparación por violaciones a derechos humanos'. Al respecto, el deber de 'reparar' tales violaciones no fue incluido en el dictamen original de reforma elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sino que surgió hasta el dictamen suscrito el 7 de abril de 2010 por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, sin que la adición fuese objeto de cambios durante el resto del proceso de reforma constitucional. Para entender el concepto de 'reparación' incorporado a la Constitución, es importante señalar que el Senado invocó el concepto de 'reparación integral' desarrollado en el marco de las Naciones Unidas, partiendo de los 'principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones." (Décima Época. Con número de registro digital: 2018805. Instancia: Primera Sala. Tesis: aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, materia constitucional, tesis 1a. CCCXXXVII/2018 (10a.), página 400).

8. "REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE HOMICIDIO. PARA QUE SE CONDENE A ELLA BASTA QUE EL JUZGADOR TENGA POR ACREDITADA LA COMISIÓN DEL ILÍCITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal, la reparación del daño será fijada por los Jueces, de acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso, también lo es que tratándose del

delito de homicidio, al resultar claro que tal reparación no puede consistir en la devolución de la cosa obtenida con motivo del delito o en el pago de su precio, ni tampoco en el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con su comisión, toda vez que, por una parte, es imposible restituir la vida de una persona y, por otra, ésta tampoco puede ser valuada económicamente por no encontrarse en el comercio, lo que, a su vez, trae como consecuencia que no sea viable que los beneficiarios o derechohabientes puedan exigir el lucro cesante por una falta de ganancia o de acrecentamiento patrimonial derivada de la muerte de la víctima, la aludida reparación debe circunscribirse al pago de una indemnización por los daños materiales o morales causados a que se refiere la fracción II del artículo 30 del propio código, siendo que es de reconocido derecho que los primeros sí pueden ser objeto de prueba, al revestir un contenido económico patrimonial y, por tanto, objetivo, mientras que los segundos, al no compartir esa misma naturaleza, deben sujetarse a reglas especiales de valoración. Ahora bien, si en este aspecto, el artículo 30, último párrafo, del mencionado código punitivo establece, de manera especial, que tratándose de delitos que afecten la vida, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte de aplicarse las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo, cuyos artículos 500 y 502 prevén una indemnización equivalente a dos meses de salario mínimo por gastos funerarios (daño material) y una cantidad adicional, equivalente a setecientos treinta días de salario mínimo, con la cual se pretende compensar el daño moral, es inconcuso que de manera imperativa obliga al juzgador en este tipo de delitos, a condenar a la reparación del daño, simplemente con tener por acreditada la Comisión del Delito de homicidio, por lo que, en principio, no es necesario que el Ministerio Público o los interesados aporten mayores pruebas para acreditar el daño causado, salvo en el caso de que consideren que los daños son superiores a los previstos en la legislación laboral, pues en este supuesto encontraría plena aplicación el principio general contenido en el primer párrafo del artículo 31 del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con el primer párrafo del artículo 34 del propio ordenamiento legal, en virtud de que el aludido artículo 30, último párrafo, sólo establece una base mínima a la cual deberá sujetarse el juzgador para calcular el monto de la indemnización.". (Novena Época. Con número de registro digital: 188109. Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 113).

9. "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO. Una vez que en un proceso penal se ha condenado a la reparación del daño, por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso civil desvinculado del proceso penal la responsabilidad objetiva del propio inculpado o de un tercero, toda vez que en ambos casos la responsabilidad civil que se reclama en ese segundo proceso es con motivo de la misma acción y el mismo daño. En este sentido, debe señalarse que la responsabilidad civil subjetiva derivada de un delito no tiene una 'naturaleza distinta' a la responsabilidad civil objetiva. No obstante, en el supuesto antes señalado, excepcionalmente podrá acudir a la vía civil cuando pueda apreciarse claramente que la legislación civil permite una mayor amplitud indemnizatoria en comparación con la legislación penal, de tal manera que la acción de reparación de daño en la vía civil pueda dar lugar a un mayor beneficio económico como resultado de una regulación más favorable para la víctima de la cuantificación del daño. Desde luego, dicha excepción no implica que en este supuesto el ofendido pueda hacer exigible la reparación del daño en la vía civil de manera completamente autónoma. La cantidad que eventualmente se conceda por concepto de reparación del daño en el proceso civil deberá descontar la indemnización que se haya cubierto con motivo de la condena decretada en el proceso penal.". (Décima Época. Con número de registro digital: 2007292, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 478).

10. "II. Naturaleza de la reparación de los daños derivados de los hechos delictivos, reclamable en el proceso penal.

"Se ha discutido ampliamente en la doctrina sobre la naturaleza civil o penal de la reparación derivada de los delitos prevista en los códigos penales. Sin embargo, actualmente existe una

postura casi unánime sobre su naturaleza civil. Se dice que el deber de reparar los daños derivados del delito tiene una naturaleza estrictamente civil, de hecho su fundamento sería el mismo que el de la responsabilidad aquiliana, y el único motivo por el que queda contenida en los códigos penales es una razón histórica o práctica.

"El Tribunal Superior de España ha sostenido una postura similar, al considerar que aun cuando la reparación del daño se encuentra regulada en el Código Penal no pierde su naturaleza civil. En efecto, desde la resolución dictada en la sentencia 349/2009, la Sala Penal de dicho tribunal ha sostenido que 'la acción civil «ex delicto» no pierde su naturaleza civil por el hecho de ejercitarse en proceso penal'. En este sentido, dicho tribunal ha llegado a afirmar la existencia de una doctrina general, conforme a la cual el régimen de la reparación de los daños derivados del delito debe atender a los principios del derecho civil, siempre que no exista un especial precepto de naturaleza penal que limite o modifique su régimen.

"En el sistema mexicano, esta Primera Sala en la Novena Época, emitió diversos precedentes en los que caracterizó a la reparación del daño de las víctimas del delito como una pena pública. En la contradicción de tesis 102/2000-PS, se dijo por ejemplo, que una de las notas distintivas de la reparación del daño prevista en el Código Penal para el Distrito Federal entonces vigente era que dicha 'sanción pecuniaria adquiere el carácter de pena pública cuando se le impone al sentenciado y el de sanción civil cuando se trata de un tercero que conforme a la legislación penal también pudiera estar obligado a cubrirla'.

"Recientemente; sin embargo, en la resolución de la contradicción de tesis 227/2013, esta Primera Sala determinó que dicha "caracterización es incorrecta, en razón de que el hecho de que la reparación del daño se reclame a través del ejercicio de la acción penal no excluye o elimina el carácter civil de la misma.

"La reparación del daño en materia penal satisface tanto una función social, en su carácter de pena o sanción pública, como una función privada, en la medida en que también contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva. En efecto, puede decirse que la reparación del daño implica una sanción pública o una pena, en el sentido de que cumple una función social que se hace exigible de oficio por el Ministerio Público. Sin embargo, lo anterior no elimina el fin primordial de la reparación del daño, consistente en resarcir a las víctimas u ofendidos de un delito de las afectaciones a sus bienes jurídicos.

"Incluso en materia civil, esta Sala ha establecido el carácter social de la reparación de los daños al incorporar los denominados 'daños punitivos'. Considerando que debe ponderarse el grado de responsabilidad de quien cometió el daño con el objeto de establecer un reproche social hacia el ilícito, si esa punición no es dada, el reconocimiento de tal desaprobación prácticamente desaparece. Por tanto, la caracterización de la reparación económica de los daños como sanción social, no es propia del ámbito penal. 'El resarcimiento del daño contribuye de manera notable a los fines penales de prevención general y especial, y de ahí que se postule un acercamiento del Derecho Civil y del Derecho Penal'.

"La valoración de los daños y su correlativa reparación tienen una naturaleza propia, independiente a los códigos o legislaciones en que se encuentren regulados, penales, administrativas o civiles. En efecto, la naturaleza de una norma no puede hacerse depender del cuerpo legal en que se halle encuadrada sino de la esfera jurídica en que produce sus efectos.

"Así, la denominada responsabilidad civil ex delicto constituye una parte de la responsabilidad civil extracontractual y se caracteriza porque el acto ilícito que la genera es constitutivo de delito. En tal sentido, para (sic) determinar si es procedente la reparación, tienen que acreditarse los mismos elementos de la responsabilidad, no obstante el código que la regule, a saber: a) el hecho ilícito, b) el daño y c) el nexo causal entre el hecho y el daño. Cada una de las legislaciones puede establecer diferencias de carácter procesal, o requisitos distintos para probar dichos elementos, así como formas de indemnización especiales.

"Así, la reparación de los daños derivados de un delito puede ser reclamada en diversas vías: (i) en la vía administrativa cuando el responsable sea el Estado; (ii) en la vía civil, tratándose de responsabilidad extracontractual derivada de un delito; y, (iii) en la vía penal, por solicitud del

Ministerio Público dentro de la misma causa penal.

"En nuestro sistema penal, particularmente en el caso del Distrito Federal, al prever la reparación de los daños en la vía penal, el legislador pretendió evitarle a la víctima la necesidad de instaurar un juicio civil por daños. Así, optó por reparar de manera simultánea a la sentencia penal, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado con el hecho delictuoso.

"El carácter dissociado entre el establecimiento de las penas y las reparaciones económicas de los daños también pueden observarse a lo largo del Código Penal del Distrito Federal. Esta circunstancia se advierte, por ejemplo, de las normas relativas a la pena innecesaria (artículo 75); a la extinción de la pena (artículo 96); y el indulto (artículo 103). En todos estos casos, el legislador ha previsto la posibilidad de que el juzgador pueda prescindir de la imposición de la pena de prisión así como que la potestad para imponer las penas o medidas de seguridad se extinga. No obstante, la legislación penal expresamente prohíbe que a través de esas determinaciones se afecte a la reparación del daño.

"Las justificaciones anteriores llevan a concluir que a pesar de que la reparación de los daños derivados del delito se encuentre en el Código Penal del Distrito Federal, ello se debió a que el legislador pretendió ahorrarle tiempo y recursos a la víctima, al evitarle el promover un juicio civil. Lo anterior, sin embargo, no cambia la naturaleza de la reparación, ni prescinde que ésta sea justa e integral, a efecto de que se subsanen debidamente las afectaciones a las víctimas.

"Ahora bien, ¿qué consecuencias derivan de la naturaleza civil de la reparación del daño en la vía penal?

"A pesar del carácter de sanción pública que tiene la reparación del daño, es importante no caracterizarla como una pena, esencialmente porque no le son aplicables los principios del derecho penal, como son el principio de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad. Ello lleva a deslindar la imposición de las penas corporales de la cuantificación de la reparación y a que el Juez resuelva atendiendo a la naturaleza civil de los daños.

"Es importante precisar que aun cuando esta Primera Sala ha comenzado a abordar el tema de la naturaleza de la reparación del daño recientemente, ya desde el amparo directo en revisión 55/2006 se había señalado que la reparación del daño se encuentra prevista en el Código Penal como una 'sanción autónoma a las penas del delito'. Circunstancia que hace patente que 'se cumple con la garantía de exacta aplicación de la ley penal, sin que para ello dicha sanción, necesariamente, requiera estar descrita en el artículo que prevea el delito en cuestión, ante la eventualidad de su imposición'.

"De dicho precedente pueden derivarse dos importantes consecuencias: (i) No es necesario que la reparación esté regulada en los términos estrictos que exige la materia penal, exacta aplicación de ley, taxatividad, etcétera; y, (ii) que el monto de la indemnización es independiente a la pena corporal o al grado de responsabilidad que se establezca. Como se explicará, en la determinación de la reparación deben valorarse otros aspectos, además del grado de responsabilidad.

"Al encontrar su fundamento en la responsabilidad penal en la culpabilidad del sujeto, la medición de la pena debe realizarse atendiendo a la medida de la culpabilidad; la cuantía de la reparación, por el contrario debe venir determinada por la entidad del daño.

"Otra de las consecuencias relevantes de la naturaleza de la reparación de los daños, es que ésta debe ser justa e integral, dado que dichos principios aplican a la figura independientemente del Código o legislación en que se encuentre regulada. Asimismo, en tanto su carácter es civil, puede acudir a la legislación civil para interpretar el alcance de la figura.

"Incluso, al resolver la contradicción de tesis 227/2013 esta Primera Sala señaló que una vez que en un proceso penal se ha condenado a la reparación del daño, por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso civil la reparación de ese mismo daño. No obstante, se consideró que cuando no se haya reparado a la víctima de manera suficiente, ésta podría acudir a la vía civil para reclamar la indemnización faltante. De dicho asunto derivó la jurisprudencia, de rubro: 'RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO.'."

11. "Artículo 46. Las sanciones aplicables por la comisión de delitos, son: a) prisión; b) multa; c) trabajo en beneficio de la comunidad; d) inhabilitación, suspensión y privación de derechos; e) caución de no ofender; f) amonestación; g) publicación especial de sentencia; h) confinamiento; i) suspensión, disolución o intervención de sociedades; o prohibición de realizar determinados actos; j) pérdida a favor del Estado, de los instrumentos del delito, cosas, bienes o valores provenientes directa o inmediatamente de su realización, así como de aquellos que constituyan para el agente un provecho derivado del mismo delito, sean de uso prohibido o lícito; k) destrucción de cosas nocivas o peligrosas; y l) las demás que fijen las leyes.

"Además de los casos previstos en este código, el Juez podrá aplicar cualquiera de las sanciones señaladas en los incisos d) al i), tomando en cuenta las circunstancias concretas de cada delito, aun cuando no estuvieren establecidas expresamente.

"El responsable de un delito cometido en agravio de una persona frente a la cual tenga derechos de patria potestad o tutela, o derechos hereditarios o de alimentos, adicionalmente podrá ser condenado a la pérdida de tales derechos. En todo caso continuarán vigentes los derechos hereditarios o de alimentos que la víctima tenga respecto del responsable del delito."

12. "Artículo 45 Bis. Son consecuencias jurídicas de responsabilidad por la comisión del delito las siguientes:

"...

"III. Reparación del daño y perjuicio."

13. "Artículo 141. Toda persona responsable de un hecho delictuoso, lo es también por el daño y perjuicio causado por el mismo. Esa responsabilidad es de orden público respecto a los penalmente responsables, por lo que en todo proceso el Ministerio Público estará obligado a solicitar, en su caso, la condena correspondiente y el Juez a resolver lo conducente, con independencia de que comparezca o no persona interesada.

"En caso de incumplimiento a la anterior disposición, de oficio, o a petición de la víctima o el ofendido según la definición contenida en la ley de atención y apoyo a las víctimas y a los ofendidos de delitos, conocerán del asunto el procurador general de Justicia o el Consejo de la Judicatura del Estado, en su caso, y si de las constancias se acredita la omisión, se impondrá una sanción administrativa de 300 a 450 cuotas si fuere responsable el Ministerio Público y de 600 a 750 cuotas en el caso de un Juez de Primera Instancia, y suspensión en ambos supuestos, sin goce de sueldo, por un periodo de 30 días naturales. En caso de reincidencia se aplicará invariablemente la destitución del cargo."

14. "REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DEL DELITO. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU NATURALEZA CIVIL. A pesar del carácter de sanción pública que tiene la reparación del daño en materia penal, es importante no caracterizarla como una pena, esencialmente porque no le son aplicables los principios del derecho penal, como son el principio de exacta aplicación de la ley y el mandato de taxatividad. Ello lleva a deslindar la imposición de las penas corporales de la cuantificación de la reparación y a que el Juez resuelva atendiendo a la naturaleza civil de los daños. Así, mientras que la fijación de la pena debe realizarse atendiendo al grado de culpabilidad del sujeto, la cuantía de la reparación, por el contrario, debe venir determinada por la entidad del daño. Otra consecuencia relevante que deriva de la naturaleza civil de la reparación del daño, es que la misma debe ser justa e integral, dado que estos principios constitucionales aplican a la figura con independencia del código o legislación en la que se encuentre regulada. Asimismo, en tanto su naturaleza es eminentemente civil, puede acudir a la legislación en la materia para interpretar el contenido y alcance de dicha reparación." (Décima Época. Con número de registro digital: 2011483, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 1142).

15. "Artículo 50. La multa consiste en pagar al estado la suma pecuniaria que se fije en la sentencia. "Para la fijación del monto de la multa, el juzgador deberá tomar en consideración la capacidad económica del sentenciado. Cuando éste no pudiera pagar la multa que se le hubiere impuesto como sanción, el juzgador fijara en sustitución de la misma, jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, que no podrán exceder de noventa."

16. "Artículo 125. Los términos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la autoridad, si las sanciones son privativas de libertad; y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria."

17. "Artículo 136. La multa prescribe en dos años; en igual forma prescriben las sanciones no sujetas a término. las demás sanciones prescriben por el transcurso de un periodo igual al que debían durar y una cuarta parte más, pero nunca excederán de sesenta años."

18. "Artículo 138. La prescripción de las sanciones privativas de libertad sólo se interrumpe aprehendiendo al reo, aunque la aprehensión se ejecute por otro delito diverso. "La prescripción de las obligaciones económicas impuestas al reo, solo se interrumpe por el embargo de bienes para hacerlas efectivas."

19. "Artículo 148. La prescripción de la responsabilidad a la que se refiere este capítulo no corre sino hasta que cause ejecutoria la sentencia dictada. "Las causas de extinción de la acción penal y de la sanción, no se extienden a las responsabilidades a que se refiere este capítulo."

20. "Artículo 479. La acción para pedir la ejecución de una sentencia, laudo, convenio judicial o extrajudicial resultado de los mecanismos alternativos para la solución de controversias, o transacción judicial, prescribirá a los diez años, contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado."

Esta ejecutoria se publicó el viernes 09 de abril de 2021 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

